

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

INE/CG681/2022

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022
DENUNCIANTES: AXEL MARTÍNEZ BETANZOS Y
OTRAS PERSONAS
DENUNCIADO: MORENA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022, INICIADO EN CONTRA DE MORENA, DERIVADO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR DIECISIETE PERSONAS, DEBIDO A QUE PRESUNTAMENTE QUINCE DE ELLAS FUERON AFILIADAS SIN SU CONSENTIMIENTO, Y DOS DE ELLAS, FUERON NOMBRADAS COMO REPRESENTANTES DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA, SIN SU CONSENTIMIENTO; Y PARA ELLO, HICIERON USO INDEBIDO DE SUS DATOS PERSONALES.

Ciudad de México, 19 de octubre de dos mil veintidós.

G L O S A R I O	
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

G L O S A R I O	
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

I. Acuerdo INE/CG33/2019.¹ El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, fue aprobado en sesión extraordinaria del *Consejo General*, el acuerdo por el cual se implementó, de manera excepcional, un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales, en el que se acordó la suspensión de la resolución de diversos procedimientos sancionadores ordinarios, relacionados con presuntas indebidas afiliaciones de ciudadanos de todos los partidos políticos.

El plazo para llevar al cabo estas actividades, sería el comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte.

II. Denuncias. A través de distintos escritos de queja, con sus respectivos anexos, presentados ante diversas Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del *INE* en diferentes estados de la República Mexicana, diecisiete personas denunciaron a **MORENA**, por la supuesta transgresión al derecho de libertad de afiliación, posible abuso del ejercicio del derecho constitucional y legal del partido político denunciado, de nombrarlos como sus representantes ante una Mesa Directiva de Casilla, así como la utilización de datos personales de las personas quejasas.

a) Presunta afiliación indebida y, en su caso, uso indebido de datos personales

C.	Persona	Queja	Fecha de recepción UTCE
1	Axel Martínez Betanzos	04/01/2022 ²	06/01/2022 ³

¹ Consultable en la liga de internet <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101664/Punto%2014%20Acuerdo%20INE-CG33-2019%20CG%20EXT%2023-01-2019.pdf>

² Visible a página 6.

³ Visible a páginas 1-2.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

C.	Persona	Queja	Fecha de recepción UTCE
2	Mitzi Ortiz Rodríguez	11/01/2022 ⁴	14/01/2022 ⁵
3	Israel Ávila Salgado	11/01/2022 ⁶	14/01/2022 ⁷
4	Rudy Ezequiel Gutiérrez Díaz	16/12/2021 ⁸	05/01/2022 ⁹
5	Diana Ángeles Lara Trujillo	10/01/2022 ¹⁰	17/01/2022 ¹¹
6	Rosa María Herrera Ledezma	13/01/2022 ¹²	14/01/2022 ¹³
7	Yesica Gutiérrez Gutiérrez	05/01/2022 ¹⁴	18/01/2022 ¹⁵
8	Dalia Karina Hernández Higareda	07/01/2022 ¹⁶	12/01/2022 ¹⁷
9	Lourdes Elizalde Juárez	09/12/2021 ¹⁸	20/01/2022 ¹⁹
10	Insdy Suárez Bautista	11/01/2022 ²⁰	20/01/2022 ²¹
11	Blanca Esmeralda Hernández Escobar	11/01/2022 ²²	20/01/2022 ²³
12	Princesa Jara Quiroz Reyes	04/01/2022 ²⁴	19/01/2022 ²⁵
13	Ernesto Ariza Becerra	10/01/2022 ²⁶	19/01/2022 ²⁷
14	Yessenia Valdez Jiménez	13/01/2022 ²⁸	18/01/2022 ²⁹
15	Lucia Viridiana Guerrero Martínez	10/01/2022 ³⁰	10/01/2022 ³¹

b) Presunto registro indebido como representantes de mesa directiva de casilla del partido denunciado y, en su caso, uso indebido de datos personales

⁴ Visible a página 20.

⁵ Visible a página 19.

⁶ Visible a página 27.

⁷ Visible a página 19.

⁸ Visible a página 38.

⁹ Visible a páginas 34-35.

¹⁰ Visible a página 44.

¹¹ Visible a páginas 42-43.

¹² Visible a página 52.

¹³ Visible a páginas 50-51.

¹⁴ Visible a página 59.

¹⁵ Visible a páginas 57-58.

¹⁶ Visible a página 67.

¹⁷ Visible a página 65.

¹⁸ Visible a página 74.

¹⁹ Visible a páginas 72-73.

²⁰ Visible a página 79.

²¹ Visible a páginas 72-73.

²² Visible a página 85.

²³ Visible a páginas 72-73.

²⁴ Visible a página 93.

²⁵ Visible a páginas 91-92.

²⁶ Visible a página 99.

²⁷ Visible a página 97.

²⁸ Visible a páginas 107-108.

²⁹ Visible a páginas 105-106.

³⁰ Visible a página 123.

³¹ Visible a páginas 121-122.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

C.	Persona	Queja	Fecha de recepción UTCE
1	María de Lourdes Hernández García	11/01/2022 ³²	12/01/2022 ³³
2	María Teresa Hernández Segura	06/01/2022 ³⁴	07/01/2022 ³⁵

III. Registro, admisión y reserva de emplazamiento.³⁶ El ocho de febrero de dos mil veintidós, con la documentación atinente, la autoridad instructora procedió a registrar el expediente **UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022**, por la supuesta transgresión al derecho de libertad de afiliación, posible abuso del ejercicio del derecho constitucional y legal de MORENA, de nombrarlos como sus representantes ante una Mesa Directiva de Casilla, así como la utilización de datos personales de las personas quejasas.

Asimismo, se admitió a trámite el asunto y se reservó acordar lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto culminara la etapa de investigación preliminar, por lo que, se ordenó requerir a los sujetos siguientes, y se solicitó al partido político denunciado la cancelación del registro de las personas quejasas como militantes de su padrón de afiliados, y que remitiera el **original** de los expedientes en los que obrara la constancia de afiliación y, en su caso, las constancias de registro como representantes ante una Mesa Directiva de Casilla.

Sujeto	Notificación	Respuesta
MORENA	INE-UT/00883/2022 10 de febrero de 2022	Escrito ³⁷ 16 de febrero de 2022
	INE-UT/001476/2022 ³⁸ 01 de marzo de 2022	Escrito ³⁹ 04 de marzo de 2022 Solicitó prórroga
	INE-UT/02050/2022 ⁴⁰ 18 de marzo de 2022	Escrito ⁴¹ 23 de marzo de 2022

³² Visible a página 10.

³³ Visible a páginas 8-9.

³⁴ Visible a páginas 114-115.

³⁵ Visible a página 113.

³⁶ Visible a páginas 129-144.

³⁷ Visible a páginas 207-211 y anexo 212-224.

³⁸ En razón de que MORENA desahogó de manera parcial el requerimiento previo, mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se ordenó requerir de nueva cuenta al partido denunciado. Visible a páginas 365-374.

³⁹ Visible a páginas 390-394 y anexo 395-396.

⁴⁰ Toda vez que MORENA solicitó prórroga para remitir la documentación requerida, mediante acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós, le fue concedida. Visible a páginas 403-407.

⁴¹ Visible a páginas 423-425.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

Sujeto	Notificación	Respuesta
		Solicitó prórroga ⁴²
DEPPP	Vía electrónica institucional enviado el 11 de febrero de 2022	Correo electrónico institucional ⁴³ 16 de febrero de 2022

IV. Instrumentación de acta circunstanciada. Mediante acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós,⁴⁴ se ordenó instrumentar acta circunstanciada,⁴⁵ con la finalidad de verificar si el registro de las personas denunciantes, como militantes de MORENA había sido eliminado y/o cancelado en el portal de internet del partido político denunciado.

El resultado de dicha diligencia arrojó que no se encontró registro de afiliación de las personas denunciantes en el portal de MORENA.

V. Vista a las personas denunciantes. Mediante acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós⁴⁶, se ordenó la vista a las personas denunciantes con las constancias proporcionadas por la DEPPP, MORENA y el acta circunstanciada de catorce de marzo de dos mil veintidós, con la finalidad de que manifestaran a lo que su derecho conviniera.

Asimismo, se dio vista a **María de Lourdes Hernández García** y **María Teresa Hernández Segura** con los nombramientos como representantes ante Mesas Directivas de Casilla para el Proceso Electoral 2020-2021, así como la documentación electoral utilizada en la jornada electoral, remitidos por la Vocal Secretaria de la 11 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de México.

No.	Persona	Notificación	Plazo para dar respuesta	Respuesta
1	Axel Martínez Betanzos	Oficio: INE/11JDE-CM/00450/2022 Fecha: 18 de abril de 2022	Del 19 al 21 de abril de 2022	Sin respuesta
2	María de Lourdes Hernández García	Oficio: INE-JDE07-MEX/VS/0227/2022 Fecha: 7 de abril de 2022	Del 8 al 12 de abril de 2022	Sin respuesta
3	Mitzi Ortiz Rodríguez	Oficio: INE-16JDE/VS/320/2022 Fecha: 7 de abril de 2022	Del 8 al 12 de abril de 2022	Sin respuesta
4	Israel Ávila Salgado	Oficio: INE-16JDE/VS/321/2022 Fecha: 7 de abril de 2022	Del 8 al 12 de abril de 2022	Sin respuesta

⁴² En razón que, de nueva cuenta, MORENA solicitó prórroga para remitir la documentación requerida, mediante acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, no le fue concedida. No obstante, se hizo del conocimiento de MORENA, que de conformidad con lo establecido en el artículo 467, párrafo 1, de la LGIPE, al momento de ser emplazado al presente procedimiento, estaría en aptitud de presentar los medios de prueba que a su interés convinieran. Visible a páginas 426-433.

⁴³ Visible a páginas 259-261.

⁴⁴ Visible a páginas 403-407.

⁴⁵ Visible a páginas 408-418.

⁴⁶ Visible a páginas 426-433.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

No.	Persona	Notificación	Plazo para dar respuesta	Respuesta
5	Rudy Esequiel Gutiérrez Díaz	Oficio: INE/CHIS/JDE03/VE/0691/2022 Fecha: 18 de abril de 2022	Del 18 al 21 de abril de 2022	Sin respuesta
6	Diana Ángeles Lara Trujillo	Oficio: INE-JDE38-MEX/VS/228/2022 Fecha: 12 de abril de 2022	Del 13 al 15 de abril de 2022	Sin respuesta
7	Rosa María Herrera Ledezma	Oficio: INE/11JDE-CM/00450/2022 Fecha: 14 de abril de 2022	Del 15 al 19 de abril de 2022	Sin respuesta
8	Yesica Gutiérrez Gutiérrez	Oficio: INE-JDE18-MEX/VE/192/2022 Fecha: 12 de abril de 2022	Del 13 al 15 de abril de 2022	Sin respuesta
9	Dalia Karina Hernández Higareda	Oficio: INE/QRO/JD05/VS/0356/2022 Fecha: 7 de abril de 2022	Del 8 al 12 de abril de 2022	Sin respuesta
10	Lourdes Elizalde Juárez	Oficio: INE-MEX-JDE30/VS/144/2022 Fecha: 10 de abril de 2022	Del 11 al 13 de abril de 2022	Sin respuesta
11	Insdy Suárez Bautista	Oficio: INE-MEX-JDE30/VS/145/2022 Fecha: 9 de abril de 2022	Del 11 al 13 de abril de 2022	Sin respuesta
12	Blanca Esmeralda Hernández Escobar	Oficio: INE-MEX-JDE30/VS/146/2022 Fecha: 8 de abril de 2022	Del 11 al 13 de abril de 2022	Sin respuesta
13	Princesa Jara Quiroz Reyes	Oficio: INE-JDE35-MEX/VS/127/2022 Fecha: 7 de abril de 2022	Del 8 al 12 de abril de 2022	Sin respuesta
14	Ernesto Ariza Becerra	Oficio: INE/MOR/JDE05/VS/0714/2022 Fecha: 13 de abril de 2022	Del 14 al 16 de abril de 2022	Sin respuesta
15	Yessenia Valdez Jiménez	Oficio: INE-JDE34-MEX/VS/180/2022 Fecha: 8 de abril de 2022	Del 11 al 13 de abril de 2022	Sin respuesta
16	María Teresa Hernández Segura	Oficio: INE-JDE11-MEX/VS/189/2022 Fecha: 13 de abril de 2022	Del 14 al 16 de abril de 2022	Sin respuesta
17	Lucía Viridiana Guerrero Martínez	Oficio: INE-JDE07-MEX/VS/0228/2022 Fecha: 7 de abril de 2022	Del 8 al 12 de abril de 2022	Sin respuesta

VI. Vista a diversas instancias del INE. Mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós,⁴⁷ se acordó dar vista al Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas Distritales Ejecutivas correspondientes, para que, en ámbito de su competencia, determinaran lo que a su derecho correspondiera.

VII. Consideraciones sobre Rudy Esequiel Gutiérrez Díaz en el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós.⁴⁸

A. No continuación del procedimiento por afiliación indebida. De la investigación preliminar se obtuvo que la persona denunciante de mérito no

⁴⁷ Visible a paginas 747-754.

⁴⁸ Visible a páginas 747-754.

estuvo ni está afiliada a **MORENA**, razón por la que, se ordenó no continuar con el procedimiento por la presunta afiliación indebida y, en su caso, uso indebido de datos personales, al no existir elementos suficientes que lo justifiquen, reservando el pronunciamiento respectivo en la resolución que en Derecho corresponda.

B. Se hizo efectivo apercibimiento y se tuvo por no presentada queja por registro como representante ante mesa directiva de casilla. Ante la omisión de **Rudy Esequiel Gutiérrez Díaz** a desahogar la prevención que le fue formulada en el acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós,⁴⁹ se hizo efectivo el apercibimiento señalado en el proveído, y se tuvo por no presentada queja en contra de **MORENA**, por el posible registro indebido como representante ante mesa directiva de casilla.

VIII. Emplazamiento. El uno de junio de dos mil veintidós,⁵⁰ se ordenó el emplazamiento a **MORENA** para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

Cabe señalar que, para lo anterior se le corrió traslado con las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Sujeto a notificar	Notificación	Respuesta
MORENA	INE-UT/05253/2022 Citatorio: 06 de junio de 2022 ⁵¹ Cédula: 07 de junio de 2022 ⁵² Plazo: 08 al 14 de junio de 2022	Escrito de 14 de junio de 2022 ⁵³

IX. Alegatos. El diecisiete de junio de dos mil veintidós,⁵⁴ se ordenó dar vista a las partes, para que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Dicha diligencia se realizó de la siguiente manera:

⁴⁹ Visible a páginas 727-734.

⁵⁰ Visible a páginas 805-812.

⁵¹ Visible a páginas 816-817.

⁵² Visible a página 818.

⁵³ Visible a páginas 822-854.

⁵⁴ Visible a páginas 855-860 (860 ambos lados).

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación	Respuesta
MORENA INE-UT/05782/2022 ⁵⁵	Citatorio: 17/06/2022 Cédula: 20/06/2022 Plazo: Del 21/06/2022 al 27/06/2022	Escrito recibido el 27/06/2022 ⁵⁶

Denunciantes

No	Nombre de la persona quejosa	Oficio-fecha-plazo	Respuesta
1	Axel Martínez Betanzos	INE/11JDE-CM/00697/2022 Cédula con personal autorizada: 07/07/2022 Plazo: Del 08/07/2022 al 14/07/2022	Sin respuesta
2	María de Lourdes Hernández García	INE-JDE07-MEX/VS/0388/2022 Cédula personal: 21/06/2022 ⁵⁷ Plazo: Del 22/06/2022 al 28/06/2022	Sin respuesta
3	Mitzi Ortiz Rodríguez	INE-16JDE/VS/558/2022 Cédula personal: 21/06/2022 Plazo: Del 22/06/2022 al 28/06/2022	Sin respuesta
4	Israel Ávila Salgado	INE-16JDE/VS/559/2022 Citatorio: 21/06/2022 Por estrados: 22/06/2022 Plazo: Del 23/06/2022 al 29/06/2022	Sin respuesta
5	Diana Ángeles Lara Trujillo	INE-JDE38-MEX/VS/388/2022 Cédula con persona autorizada: 22/06/2022 Plazo: Del 25/06/2022 al 29/06/2022	Sin respuesta
6	Rosa María Herrera Ledezma	INE/11JDE-CM/00698/2022 Citatorio: 07/07/2022 Por estrados: 08/07/2022 Plazo: Del 11/07/2022 al 15/07/2022	Sin respuesta
7	Yesica Gutiérrez Gutiérrez	INE-JDE18-MEX/VE/338/2022 Cédula personal: 4/07/2022 Plazo: Del 05/07/2022 al 11/07/2022	Sin respuesta
8	Dalia Karina Hernández Higareda	INE/QRO/JD05/VS/0565/2022 Cédula personal: 22/06/2022 Plazo: Del 23/06/2022 al 29/06/2022	Sin respuesta
9	Lourdes Elizalde Juárez	INE-MEX-JDE30/VS/241/2022 Cédula personal: 21/06/2022 Plazo: Del 22/06/2022 al 28/06/2022	Sin respuesta

⁵⁵ Visible a pagina 879 (ambos lados).

⁵⁶ Visible a paginas 900-930.

⁵⁷ Visible a pagina 945.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

No	Nombre de la persona quejosa	Oficio-fecha-plazo	Respuesta
10	Insdý Suárez Bautista	INE-MEX-JDE30/VS/242/2022 Citatorio: 22/06/2022 Cédula: 23/06/2022 Plazo: Del 24/06/2022 al 30/06/2022	Sin respuesta
11	Blanca Esmeralda Hernández Escobar	INE-MEX-JDE30/VS/243/2022 Cédula personal: 23/06/2022 Plazo: Del 24/06/2022 al 30/06/2022	Sin respuesta
12	Princesa Jara Quiroz Reyes	INE-JDE35-MEX/VS/200/2022 Cédula personal: 22/06/2022 Plazo: Del 23/06/2022 al 30/06/2022	Sin respuesta
13	Ernesto Ariza Becerra	INE/MOR/JDE05/VS/1339/2022 Cédula personal: 21/06/2022 Plazo: Del 22/06/2022 al 28/06/2022	Sin respuesta
14	Yessenia Valdez Jiménez	INE-JDE34-MEX/VS/327/2022 Citatorio: 21/06/2022 Por estrados: 22/06/2022 Plazo: Del 23/06/2022 al 30/06/2022	Sin respuesta
15	Lucía Viridiana Guerrero Martínez	INE-JDE07-MEX/VS/0389/2022 Cédula personal: 21/06/2022 Plazo: Del 22/06/2022 al 28/06/2022	Sin respuesta
16	María Teresa Hernández Segura	Por estrados: 04/07/2022 Plazo: Del 05/07/2022 al 11/07/2022	Sin respuesta

X. Verificación final de no reafiliación. De la búsqueda en los registros del Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, se advierte que los registros de las personas denunciantes fueron dados de baja del padrón de militantes de **MORENA**, sin advertir alguna nueva afiliación.

Dicha información es idéntica con la proporcionada en su momento mediante correo electrónico de **dieciséis de febrero** de dos mil veintidós.⁵⁸

XI. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, se procediera a formular el presente proyecto de resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias del **INE**.

XII. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. En la cuarta sesión ordinaria de carácter privado, celebrada el doce de octubre de dos mil veintidós, la referida Comisión analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

⁵⁸ Visible a páginas 259-261.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA.

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*, respecto de las conductas que se definen como infractoras a dicha Ley electoral, atribuidas a los sujetos obligados a la misma.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), x) e y) de la *LGPP*, con motivo de la probable transgresión al derecho de libertad de afiliación; así como por el posible abuso del ejercicio del derecho constitucional y legal del partido político denunciado, de nombrarlos como sus representantes ante una Mesa Directiva de Casilla, así como la utilización de datos personales, por parte de **MORENA**, en perjuicio de las personas que han sido señaladas a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones, y en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas a **MORENA**, derivado, esencialmente, por la transgresión al derecho de libre afiliación, así como por el abuso del derecho constitucional y legal de nombrar representantes ante mesa directiva de casilla, sin su consentimiento y, en su caso, la utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,⁵⁹ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de personas a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por transgresión a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por transgresión a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIFE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

⁵⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

SEGUNDO. CONSIDERACIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO

El partido político MORENA, en su escrito de contestación al emplazamiento, así como en su escrito de alegatos, invocó como causal de desechamiento las siguientes excepciones:

- ✓ Sine actione agis, consistente en irrigar la acreditación de hechos presuntamente violatorios a la normativa electoral narrados en las quejas hechas valer, toda vez que a juicio de la parte denunciada no existe caudal probatorio suficiente para acreditar las conductas señaladas en las quejas presentadas por las partes actoras.
- ✓ Obscuridad en las quejas, derivado de que las partes denunciantes no puntualizan las circunstancias de modo tiempo y lugar para acreditar el elemento volitivo de la conducta infractora.
- ✓ Plus petitio, ya que las partes quejosas demandan más de lo que es debido, por carecer de motivación.

Al respecto, el artículo 46, párrafo 1, fracción III, del Reglamento de Quejas establece lo siguiente:

“Artículo 46.

Desechamiento, improcedencia y sobreseimiento en el procedimiento sancionador ordinario

1. La queja o denuncia será desechada de plano, cuando:

...

III. Resulte frívola, de acuerdo con lo establecido en los artículos 440, párrafo 1, inciso e) de la Ley General.”

Por su parte, el artículo 440, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, mandata lo siguiente:

“Artículo 440.

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

...

e) Reglas para el procedimiento ordinario sancionador por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose por tales:

I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho;

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

- II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten pruebas mínimas para acreditar su veracidad;
- III. Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral, y
- IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar la veracidad.”

En ese sentido, se advierte que la causal invocada por MORENA es la contenida en la fracción I, del inciso e), del artículo 440, de la LGIPE, es decir, solicita el desechamiento de la denuncia por contener pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, o bien, porque es notorio y evidente que la pretensión no se encuentra al amparo del derecho.

Con relación a ello, esta autoridad resolutora considera que no le asiste la razón al instituto político denunciado, en virtud de que la pretensión de las personas quejasas jurídicamente es viable, pues por un lado, manifiestan su descontento en formar parte de ese partido político, situación que ya fue atendida favorablemente a éstas, si tomamos en consideración que su registro ha sido cancelado; y por otro, si tomamos en consideración que uno de los propósitos del procedimiento ordinario sancionador es la imposición de sanciones administrativas ante el incumplimiento de la normativa electoral, situación que solo puede determinarse si se entra al fondo del asunto.

Aunado a lo anterior, se concluye que la pretensión del actor se encuentra al amparo de la norma, pues es un derecho de la ciudadanía denunciar a los sujetos de derecho que afecten o violenten su esfera jurídica, máxime que la libre afiliación política y el derecho a la protección de datos personales, son derechos de rango constitucional.

Por las consideraciones antes expuestas, se considera que no le asiste la razón al partido político MORENA, en consecuencia, es improcedente la causal de desechamiento que hace valer; por lo que se procede a resolver el fondo del presente asunto.

A similares consideraciones se arribaron en las resoluciones INE/CG360/2020 e INE/CG56/2021, que resolvieron los procedimientos ordinarios sancionadores UT/SCG/Q/RVM/JD14/PUE/75/2019 y UT/SCG/Q/NRRS/JD07/HGO/32/2020, respectivamente.

TERCERO. SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LA DENUNCIA DE INDEBIDA AFILIACIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES CON TAL FIN DE RUDY ESEQUIEL GUTIÉRREZ DÍAZ.

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIFE*, en relación con el diverso 46, párrafo 2, del Reglamento de Quejas, establecen que las causales de improcedencia que produzcan el sobreseimiento de una queja o denuncia deberán ser examinadas de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público.

En principio, se debe asentar que el sobreseimiento, en términos de lo previsto en el artículo 466, párrafo 2, inciso a), de la *LGIFE* se actualiza cuando habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de improcedencia.

Esto es, se da como efecto inmediato, al actualizarse una causal de improcedencia, antes de que se dicte resolución o sentencia, y una vez admitida la queja o denuncia.

En el presente procedimiento sancionador ordinario se actualiza el sobreseimiento de la denuncia de indebida afiliación y uso indebido de datos personales, con tal fin, presentada por **Rudy Esequiel Gutiérrez Díaz**, en atención a que se carece de materia para realizar un pronunciamiento de fondo respecto a la cuestión planteada por la persona quejosa, puesto que, con posterioridad al dictado del acuerdo de admisión, y derivado de las diligencias de investigación realizadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se pudo corroborar que, contrario a lo que afirmó a través de su escrito de queja, no es, ni ha sido militante del denunciado.

Por lo que, en modo alguno, pudo haber sufrido una transgresión a su derecho de libre afiliación, ni el uso indebido de sus datos personales para tal fin, y como consecuencia de ello, no puede fincarse algún tipo de responsabilidad al partido político por cuestiones que no acontecieron.

En efecto, en el caso que nos ocupa, como se puede observar de la lectura de su escrito inicial, la persona quejosa afirmó haber sido incorporada por MORENA a su padrón de militantes; para lo cual, dicha entidad presuntamente hizo uso indebido de sus datos personales, sin que esta persona hubiera prestado su consentimiento para tal propósito.

Al respecto, cabe señalar que la Unidad Técnica, mediante acuerdo de **ocho de febrero** de dos mil veintidós,⁶⁰ registró la denuncia de referencia determinó realizar dos requerimientos de información, uno al partido denunciado y otro a la *DEPPP*, para que, conforme a los datos que obrasen en su poder, precisaran si la persona quejosa cuyo asunto nos ocupa estaba o no registrada como afiliada a MORENA.

Atento a lo anterior, los sujetos requeridos, al dar contestación al requerimiento mencionado, precisaron de manera clara y contundente, que **Rudy Ezequiel Gutiérrez Díaz**, no se encontraba registrado como afiliado a MORENA, indicando la *DEPPP*, textualmente lo siguiente:

“El C. **Rudy Ezequiel Gutiérrez Díaz**, identificado con el número 4 (cuatro) en el punto DÉCIMO del Acuerdo remitido, no fue localizado dentro del padrón de personas afiliadas a MORENA.”

Por su parte, **MORENA** manifestó que después de la búsqueda en su padrón de afiliados, no se encontró registro alguno de **Rudy Ezequiel Gutiérrez Díaz**.

En ese sentido, mediante acuerdo de **veinticinco de mayo** de dos mil veintidós,⁶¹ se estimó que no resultaba procedente continuar la tramitación del procedimiento por cuanto hace a la presunta afiliación indebida y uso de datos con tal fin, toda vez que, no se contaban con elementos que permitieran determinar, ni siquiera de manera indiciaria una posible afiliación.

En el mismo tenor, atento a que la resolución de los procedimientos sancionadores ordinarios es competencia de este *Consejo General*, se reservó el pronunciamiento respectivo en la resolución que en Derecho corresponda.

De conformidad con lo antes reseñado, este *Consejo General* considera que es procedente **sobreseer** el presente asunto, por carecer de materia el pronunciamiento de fondo, puesto que, en acatamiento al principio de congruencia de las resoluciones, el fallo correspondiente debería versar sobre lo legal o ilegal de la incorporación de la quejosa al padrón de afiliados de **MORENA**, cuestión que, como antes quedó demostrado, no aconteció en realidad.

Como es de explorado derecho, la función jurisdiccional —independientemente de la naturaleza administrativa o judicial de que se encuentre revestido el órgano competente—, tiene por finalidad el dictado de una resolución que dirima, en

⁶⁰ Visible a páginas 129-144.

⁶¹ Visible a páginas 747-754.

totalidad y exclusividad, el conflicto de intereses sometido a su consideración por las partes, de manera que debe decidir si asiste la razón al que pretende o al que resiste.

En esa medida, el presupuesto fundamental para el dictado de una resolución de fondo estriba en la existencia de una situación jurídica calificada como relevante por el derecho, de manera que, si la materia no existe, resulta ocioso el dictado de una resolución que se pronuncie sobre acontecimientos que no sucedieron en la realidad, haciendo inalcanzable la pretensión expresada por la persona quejosa a través de su escrito.

Sirven de apoyo a lo anterior, mutatis mutandis, la Tesis de Jurisprudencia **13/2004**,⁶² emitida por el *Tribunal Electoral*, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA.- De la interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3, párrafo 1; 9, párrafo 3; 11, párrafo 1, inciso b); 25, y 84, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que uno de los objetivos o fines de los medios de impugnación en materia electoral, consiste en establecer y declarar el derecho en forma definitiva, esto es, **definir la situación jurídica que debe imperar cuando surge una controversia entre dos sujetos de derecho**, no sólo respecto del actor, sino también de su contraparte, incluidos los probables terceros interesados. El objetivo mencionado hace evidente que **uno de los requisitos indispensables para que el órgano jurisdiccional electoral pueda conocer de un juicio y dictar la resolución de fondo que resuelva la controversia planteada, consiste en la viabilidad de los eventuales efectos jurídicos de esa resolución; esto es, que exista la posibilidad real de definir, declarar y decir en forma definitiva el derecho que debe imperar ante la situación planteada.** Tal requisito constituye un presupuesto procesal del medio de impugnación que, en caso de no actualizarse, provoca el desechamiento de plano de la demanda respectiva o **el sobreseimiento en el juicio, en su caso**, toda vez que, de lo contrario, **se estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio y dictar una resolución que no podría jurídicamente alcanzar su objetivo fundamental.**

[Énfasis añadido]

En este orden de ideas, es preciso no perder de vista que los hechos denunciados por la persona quejosa, consistían, medularmente, en haber sido incorporada al padrón de militantes de **MORENA**, mediante el uso de sus datos personales, sin

⁶² Consultable en la página: <https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%2013/2004>.

que lo hubiera consentido previamente, de manera que existían dos elementos a dilucidar en la resolución de fondo, uno objetivo y otro subjetivo:

1. Elemento objetivo. Que la persona denunciante fue afiliada a **MORENA** sin haber otorgado su consentimiento; y

2. Elemento subjetivo. Que dicha actuación sea imputable al citado partido político.

En relación con ello, cabe resaltar que la premisa fundamental del primero de los elementos señalados consiste en que la afiliación haya existido, para determinar a continuación si la misma se ajustó o no a las disposiciones que regulan el ejercicio del derecho de libre afiliación a los partidos políticos, puesto que, de no haber existido la afiliación cuestionada, como en el caso que nos ocupa, **no existe materia de verificación; es decir, no existe un hecho objetivo y concreto para realizar un ejercicio de subsunción, a fin de resolver si se ajustó o no al orden jurídico nacional**, como se puede advertir con claridad de la Jurisprudencia **34/2002**,⁶³ sostenida por la *Sala Superior*, aplicable al presente asunto mutatis mutandis, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA- El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. **El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de**

⁶³ Consultable en la página <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002>

intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto **ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después.** Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que **al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación.** Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que **cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento.**

[Énfasis añadido]

En ese orden de ideas, toda vez que carecería de todo propósito y utilidad que este *Consejo General* se pronunciara sobre una afiliación que nunca sucedió y, por tanto, es material y jurídicamente imposible que resulte desapegada al marco normativo, lo procedente es declarar el **sobreseimiento** del presente procedimiento sancionador ordinario, de conformidad con la interpretación de lo previsto en los artículos 441, de la *LGIE*, en relación con el diverso 11, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral únicamente por lo que hace a la queja presentada por **Rudy Esequiel Gutiérrez Díaz**, por su supuesta indebida afiliación a **MORENA**.

A similar conclusión arribó este *Consejo General* al emitir, entre otras, las resoluciones **INE/CG490/2020**,⁶⁴ **INE/CG61/2022**⁶⁵ e **INE/CG335/2022**,⁶⁶ de siete de octubre de dos mil veinte, cuatro de febrero y nueve de mayo de dos mil veintidós, que resolvieron los procedimientos administrativos sancionadores UT/SCG/Q/SYCC/JD01/QROO/282/2018, UT/SCG/Q/ALLM/JD20/CDM/148/2020 y UT/SCG/Q/VAZD/JD12/MEX/201/2020, respectivamente.

⁶⁴ Visible en la página de internet: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115007/CGex202010-07-rp-1-173.pdf>

⁶⁵ Visible en la página de internet: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126907/CGex202202-04-rp-5-25.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁶⁶ Visible en la página de internet: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/134698/CGex202205-09-rp-1-74.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

CUARTO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas que se denuncian se cometieron **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que, supuestamente, con anterioridad a la entrada en vigor de la *LGIFE*, MORENA transgredió el derecho de libertad de afiliación de **Axel Martínez Betanzos, Mitzi Ortiz Rodríguez, Dalia Karina Hernández Higareda, Ernesto Ariza Becerra y Lucía Viridiana Guerrero Martínez**, es decir, antes de veintitrés de mayo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*,⁶⁷ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por las personas denunciantes y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIFE*.

No obstante, para el caso de **Israel Ávila Salgado, Diana Ángeles Lara Trujillo, Rosa María Herrera Ledezma, Yesica Gutiérrez Gutiérrez, Blanca Esmeralda Hernández Escobar, Princesa Jara Quiroz Reyes, Yessenia Valdez Jiménez, Lourdes Elizalde Juárez e Insdy Suárez Bautista**, fueron afiliadas con posterioridad a la entrada en vigor de la *LGIFE*, y en el caso de **María de Lourdes Hernández García y María Teresa Hernández Segura**, fueron registradas como representantes de casilla para el Proceso Electoral 2020-2021, por lo que será aplicable dicha normativa.

Finalmente, será la *LGIFE* y el Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE*, la normativa aplicable para cuestiones procesales y/o adjetivas.

QUINTO. EFECTOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL INE/CG33/2019

Para los efectos de la resolución del asunto que nos ocupa, y con el propósito de conocer las razones que subyacen a la problemática de las indebidas afiliaciones cometidas por los partidos políticos en perjuicio del derecho político electoral de libre afiliación, es necesario mencionar que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General* aprobó el acuerdo **INE/CG33/2019**, por el que se implementó

⁶⁷ El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos nacionales.

Las razones que motivaron la suscripción del mencionado acuerdo fueron las siguientes:

- 1)** La imposición de sanciones económicas que se venían aplicando a los partidos políticos por la transgresión al derecho de libre afiliación política fue insuficiente para inhibir esta conducta.
- 2)** Los partidos políticos reconocieron la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.
- 3)** La revisión que el *INE* hizo a los padrones de las y los militantes de los partidos políticos nacionales en dos mil catorce y dos mil diecisiete, se circunscribió a verificar su número mínimo de afiliadas y afiliados para la conservación de su registro y a vigilar que no existiese doble afiliación, a partidos políticos con registro o en formación.
- 4)** Dicha verificación no tuvo como propósito revisar que los partidos políticos efectivamente contasen con el documento comprobatorio de la afiliación de las y los ciudadanos en términos de lo previsto en su normativa interna.

Así, esta autoridad electoral nacional, con la finalidad de dar una solución integral al problema generalizado respecto de la correcta afiliación y desafiliación, y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, así como fortalecer el sistema de partidos, estimó necesario implementar, de manera excepcional, un procedimiento para garantizar que, en un breve período, sólo se encuentren inscritas las personas que de manera libre y voluntaria hayan solicitado su afiliación, y respecto de las cuales se cuente con alguno de los documentos que avalen su decisión.

El proceso de actualización se concibió obligatorio y permanente, lo cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

Para alcanzar el objetivo propuesto en dicho acuerdo, se estableció una suspensión temporal en la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores, con las excepciones siguientes:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

- Aquellos supuestos en los que se actualizara la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral; o bien,
- Porque se encontrarán en la hipótesis de cumplimiento a una ejecutoria dictada por alguna de las Salas que integran el *Tribunal Electoral*.

Asimismo, previó una serie de actividades y obligaciones para los partidos políticos, que debían ser ejecutadas en el plazo comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y cuyo incumplimiento tendría como efecto anular la suspensión de la resolución de los procedimientos e imponer las sanciones atinentes.

En este sentido, debe destacarse que, durante la vigencia del referido acuerdo, se procedió a eliminar de los padrones de militantes el registro de las personas denunciantes en el procedimiento, tanto en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la *DEPPP*, como de sus portales de internet y/o cualquier otra base pública en que pudieran encontrarse, logrando eliminar el registro de más de 9 millones de personas.

Cabe señalar, que los padrones de afiliadas y afiliados son bases de datos variables debido a los movimientos de altas y bajas que llevan a cabo todos los días los partidos políticos nacionales; además de ello, el proceso de verificación permanente de que son objeto los padrones, implica que los nuevos registros se compulsen contra el padrón electoral y entre los padrones de los partidos políticos con registro vigente y en proceso de constitución, para determinar si serán registros válidos, sujetos de aclaración o definitivamente descartados.

En ese sentido, de conformidad con los elementos con que cuenta este *Consejo General* al momento de resolver el presente asunto, es válido concluir que la revisión y seguimiento en el desahogo de las etapas supervisadas de manera particular y puntual por esta autoridad, así como la actitud activa de los partidos políticos en el desarrollo de sus actividades y obligaciones, permitió alcanzar el propósito perseguido con el acuerdo **INE/CG33/2019**, esto es, atender la problemática de raíz hasta entonces advertida y depurar los padrones de afiliados de los partidos políticos, garantizando con ello el ejercicio del derecho de libre afiliación en beneficio de la ciudadanía.

En suma, el acuerdo **INE/CG33/2019**, emitido por este *Consejo General*, tuvo como propósito ser un parteaguas que sentase las bases que permitieran transitar hacia

padrones de militantes sólidos y confiables, para superar el alto número de afiliaciones indebidas encontradas antes de su aprobación, visto que, hasta ese momento, la pura imposición de multas no había sido una solución de fondo a la tutela del derecho fundamental de libertad de afiliación, propiciaba el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

En este sentido, el referido acuerdo delineó un régimen transitorio que permitiera a los institutos políticos consolidar sus padrones, a través del agotamiento de los procedimientos siguientes:

1. En cuanto a las afiliaciones recabadas **antes** de la aprobación del acuerdo **INE/CG33/2019**, los partidos políticos debían poner en estado de *reserva* la totalidad de su militancia, con el fin de verificar si contaban en sus archivos con la documentación probatoria del consentimiento de las y los ciudadanos que figuraban como sus militantes.
2. Atinente a las afiliaciones, refrendos o ratificaciones recabados **después** de la entrada en vigor del acuerdo, los partidos políticos tienen la obligación de conservar el documento, ya sea físico o electrónico, que acredite la voluntad de la persona afiliada de ser integrada como militante del partido político respectivo, de manera que, en un escenario ideal, cada una de las afiliaciones o refrendos recabados a partir del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, estuviera debidamente soportada.
3. Por otro lado, en cuanto a la **depuración** de sus padrones, a partir de la aprobación del acuerdo, los partidos políticos debían examinar sus archivos para determinar respecto de cada uno de sus militantes, si contaban con la documentación que acreditara la legítima afiliación y, en caso de no contar con ella, buscar la ratificación de la militancia de las y los ciudadanos respectivos, a más tardar, el treinta y uno de enero de dos mil veinte y, de no lograrlo, dar de baja a la persona en cuestión; en caso de contar con la documentación respectiva, o bien obtener la ratificación de militancia, debían solicitar a la **DEPPP** la reversión del estatus de ***reserva a válido***.
4. Asimismo, se ordenó **suspender la resolución** de los procedimientos ordinarios sancionadores cuya materia consistiera en la presunta indebida afiliación a los partidos políticos, hasta en tanto concluyeran las etapas previstas por el acuerdo, a fin de que este *Consejo General* pudiera contar con datos que revelaran la conducta observada por los institutos políticos durante y después de la vigencia del acuerdo multicitado, así como la

realización de las actividades previstas en el mismo, y tomarlas en consideración al momento de resolver en definitiva el procedimiento respectivo y, en su caso, imponer una sanción proporcional no sólo a la comisión intrínseca de la falta, como hasta entonces, sino además, ponderara las medidas y acciones tomadas por los partidos políticos para resolver el problema subyacente.

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO.

1. Materia de la controversia.

En el presente asunto se debe determinar si **MORENA** vulneró lo dispuesto en los artículos 6, párrafo cuarto, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 341, párrafo 1, inciso a), y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b), 23, párrafo 1, inciso j), y 25, párrafo 1, incisos a), e), e y), de la *LGPP*, por la supuesta **afiliación indebida y uso de datos personales** de catorce personas, así como la presunta transgresión a los derechos político-electorales de **María de Lourdes Hernández García y María Teresa Hernández Segura, por el posible abuso del ejercicio del derecho constitucional y legal del partido político denunciado, de nombrar a quienes lo representen ante las Mesas Directivas de Casilla**, durante una jornada electoral; en términos de lo previsto en los artículos 262 y 397, de la *LGIPE*, y en el acuerdo INE/**CG298/2020**, del *Consejo General*, de rubro **ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL MODELO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE SOLICITUDES, SUSTITUCIONES Y ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES GENERALES Y ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS QUE DERIVEN DEL MISMO.**

2. Marco normativo.

A) *Constitución*, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de las y los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta

al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano y ciudadana mexicanos tienen derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un

sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 de la *Constitución*— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.⁶⁸

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,⁶⁹ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

⁶⁸ Consultable en la página del *Tribunal Electoral* o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

⁶⁹ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como partido político nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales publicada el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, inciso a) que era un requisito para constituirse como partido político nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o distritos electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los partidos políticos nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIPE*, que es obligación de los partidos políticos nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o distritos electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los partidos políticos nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los partidos políticos nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en

caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normativa general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la *Constitución*, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los partidos políticos nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de

ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los documentos necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna de MORENA

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente del Estatuto y Reglamento de Afiliación de *MORENA*:

Estatutos de MORENA⁷⁰

Artículo 3º. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los siguientes fundamentos:

...

g. La afiliación será **individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole**; sin que se permitan facciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general;

...

Artículo 4º. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine. **La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, y quienes decidan**

⁷⁰ Consultado en portal.anterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/...y.../ESTATUTOMORENA.doc el 18 de julio de 2018.

sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia, independientemente del lugar donde se reciba la solicitud. No podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los afiliados a MORENA se denominarán Protagonistas del cambio verdadero.

Artículo 4° Bis. Podrán afiliarse a MORENA, los ciudadanos mexicanos que así lo manifiesten y presenten al momento de solicitar su registro credencial para votar con fotografía emitida por la autoridad electoral federal; en el caso de los menores de dieciocho años presentarán una identificación oficial con fotografía; **cada persona firmará el formato de afiliación correspondiente autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional.**

El Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se constituye con las afiliaciones de los Protagonistas del Cambio Verdadero y su organización, depuración, resguardo y autenticación está a cargo de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, como responsable nacional ante las instancias internas y electorales del país.

...

Artículo 5°.

Las y los **Protagonistas del cambio verdadero** tendrán las siguientes garantías (derechos):

a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un **Comité de Protagonistas** y contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la transformación de nuestro país;

...

Artículo 13° Bis. MORENA garantizará la transparencia de su información hacia la ciudadanía y contará con un órgano que garantizará el acceso a la información conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. El reglamento correspondiente desarrollará la organización del órgano de transparencia y la forma en que habrá de cumplirse la ley.

MORENA garantizará la protección de datos personales de los Protagonistas del cambio verdadero, así como los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos casos.

Artículo 15°. La afiliación de protagonistas del cambio verdadero podrá hacerse en trabajo casa por casa, por internet, o en cualquier instancia municipal, distrital, estatal, nacional o internacional de MORENA. Todas y todos los protagonistas deberán ser registrados en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero.

Corresponderá a las secretarías de organización de los distintos niveles ejecutivos: municipal, estatal, nacional o internacional, proponer su incorporación a un Comité de Protagonistas o la conformación de un nuevo comité. Los Protagonistas de MORENA también podrán organizarse en los comités que libremente constituyan y registren ante

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

cualquier secretaría de organización municipal, estatal, nacional o internacional. La secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional creará un registro nacional de comités de Protagonistas.

Cada comité de MORENA deberá guiarse por lo establecido en los Artículos 2° a 6° del presente Estatuto, y realizar sus actividades territoriales de acuerdo con el plan de acción aprobado por la Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior en su ámbito territorial. En el caso de que realice actividades correspondientes a un sector, coordinará sus iniciativas y actividades con las secretarías que correspondan a nivel municipal, estatal o nacional.

Reglamento de Afiliación de MORENA

...

Artículo 4. La afiliación a MORENA será individual, libre, pacífica y voluntaria; quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia.

ARTÍCULO 5. La afiliación se llevará a cabo en un formato impreso para el caso, que deberá aprobar el CEN y contendrá como mínimo:

- a) El nombre y apellidos de la persona que se afilia;
- b) Fecha de afiliación;
- c) Domicilio completo;
- d) Clave de elector;
- e) Correo electrónico;
- f) Sección electoral;
- g) Código postal;
- h) Teléfono;
- i) Firma del solicitante.**
- j) CURP en el caso de los menores de 18 años

D) Normativa emitida por este Consejo General

Ahora bien, resulta importante precisar la determinación que respecto de las afiliaciones y los padrones de militantes de los partidos políticos asumió el órgano máximo de dirección del *INE*, al emitir el acuerdo registrado con la clave *INE/CG33/2019*, por el cual se aprobó *la implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales*, ello derivado de la vinculación que tiene con la materia de la probable infracción que se analiza en el procedimiento al rubro indicado.

Acuerdo INE/CG33/2019

“CONSIDERANDO

...

10. Justificación del Acuerdo.

...

Con la información anterior, tenemos que derivado de la publicación de los padrones de afiliadas y afiliados a los partidos políticos, desde 2014 a la fecha, el INE ha recibido diversas quejas presentadas por la ciudadanía por indebida afiliación en todos y cada uno de los PPN, toda vez que las personas ciudadanas pueden revisar si están o no afiliadas a algún partido político y puede darse el caso de ciudadanas y ciudadanos que, por algún interés particular, se vean afectados al encontrarse registrados como militantes de estos, tal es el caso de las personas interesadas para ser contratadas como Capacitadores Asistentes Electorales o cuando se convoca para ser designados como Consejeras y Consejeros de los Consejos Locales y Distritales del INE, o para integrar los OPLE.

Así, se puede evidenciar que, en distintos periodos, todos y cada uno de los partidos políticos que han tenido registro a nivel nacional, han sido sancionados por indebidas afiliaciones.

Ello evidencia que los padrones de militantes de los PPN no están lo suficientemente actualizados ni sistematizados con la documentación que acredite la afiliación. Lo cual genera que resulten fundados los casos de indebidas afiliaciones, debido a que los partidos políticos no acreditan en forma fehaciente que las y los ciudadanos efectivamente se afiliaron a determinado partido, o bien, porque los partidos políticos no tramitan las renunciaciones que presentan sus afiliadas y afiliados y, por tanto, no los excluyen del padrón de militantes.

Ahora bien, esta autoridad considera que la imposición de sanciones económicas ha sido insuficiente para inhibir la indebida afiliación de personas a los PPN, ya que ésta continúa presentándose. Incluso, los propios PPN reconocen que es necesario iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación ya que la falta de documentos se debe a diversas circunstancias; es decir, el hecho de que el INE sancione a los PPN no ha servido para solucionar el problema de fondo, que consiste en la falta de rigor en los procedimientos de afiliación y administración de los padrones de militantes de todos los PPN, en tanto que la mayoría de ellos no cuentan con las respectivas cédulas de afiliación.

...

Así las cosas, con la finalidad de atender el problema de fondo y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, aunado a que en el mes de enero de dos mil diecinueve inició el procedimiento para la constitución de nuevos PPN (lo que implica que la o el ciudadano que aparece registrado como militante de algún PPN, no puede apoyar la constitución de algún nuevo partido) y en aras de proteger el derecho de libre afiliación de la ciudadanía en general, la que milita y la que no y fortalecer el sistema de partidos, **se estima necesario aprobar la implementación de manera excepcional de un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

militanes de los PPN que garantice que, en un breve período, solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de los cuales se cuente con alguno de los documentos referidos en el considerando 12, numeral 3. En el entendido de que el proceso de actualización debe ser obligatorio y permanente conforme a los Lineamientos referidos en los Antecedentes I y II.

Con ello, no sólo se protegen y garantizan los derechos político-electorales de las personas, sino se fortalece el sistema de partidos, el cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

...

ACUERDO

PRIMERO. Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el cual tendrá vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo como Anexo Único.

SEGUNDO. Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos llevarán a cabo los trabajos necesarios y pertinentes que permitan implementar el servicio a la ciudadanía de solicitar su baja del padrón de afiliadas y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este Instituto.

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciadas que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.

CUARTO. Los PPN deberán cancelar el registro de las y los ciudadanos que hubieren presentado la solicitud de baja del padrón, con independencia de que cuenten o no con el documento que acredite la afiliación, para garantizar el cumplimiento de la última voluntad manifestada.

QUINTO. Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las cuales no cuenten con la cédula de afiliación, refrendo o actualización una vez concluida la etapa de ratificación de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá darse en contra de la voluntad de la o el afiliado."

E) Derecho de los partidos políticos a registrar a representantes ante mesas directivas de casilla o representantes generales.

La *LGIPE* prevé como parte de los derechos de los partidos políticos, registrar representantes ante las mesas directivas de casilla o generales, con la finalidad de que puedan observar todo el procedimiento de votación, como salvaguarda necesaria para la integridad y transparencia de la elección.

En efecto, en el artículo 259 de la *LGIPE*, se establece lo siguiente:

1. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales propietarios...

3. Los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las mesas directivas de casilla y generales, podrán firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla...

A su vez, en el artículo 262, párrafo 1, de la Ley en cita, se establece que el registro de los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla y de los representantes generales se hará ante el Consejo Distrital correspondiente, así mismo, determina las reglas a las que deberá sujetarse.

En el artículo 264, párrafo 1, de la *LGIPE*, se prevé que los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla deberán contener los siguientes datos:

- a)** Denominación del partido político o nombre completo del candidato independiente;
- b)** Nombre del representante;
- c)** Indicación de su carácter de propietario o suplente;
- d)** Número del Distrito electoral, sección y casilla en que actuarán;
- e)** Clave de la credencial para votar;
- f)** Lugar y fecha de expedición; y
- g)** Firma del representante o del dirigente que haga el nombramiento.

En este tenor, el dispositivo 265, párrafo 1, del referido ordenamiento legal, establece que los nombramientos de los representantes generales deberán contener los mismos que los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla, con excepción del número de casilla.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

Por su parte el acuerdo **INE/CG298/2020** aprobado por el *Consejo General* relativo a dicho procedimiento, vigente al momento de la posible falta, de rubro “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL MODELO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE SOLICITUDES, SUSTITUCIONES Y ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES GENERALES Y ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS QUE DERIVEN DEL MISMO.”⁷¹

En dicho acuerdo, se aprobaron las formas que contienen los requisitos y datos que deberá reunir la documentación que los partidos políticos utilizaron para registrar a sus representantes ante las mesas directivas de casilla y representantes generales, para la jornada electoral del **seis de junio de dos mil veintiuno**.

Además, se estableció que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de este Instituto, proporcionaría a los dirigentes y representantes de los partidos políticos nacionales y locales debidamente acreditados ante los Consejos Distritales del Instituto, el acceso a un sistema informático que facilitaría el llenado y generación de las formas referidas, con la finalidad de que lo utilizaran con preferencia para el registro de sus representantes ante mesa directiva de casilla.

Asimismo, se previeron las siguientes fechas, para el desarrollo de actividades en el ejercicio del derecho de los partidos políticos a nombrar representantes generales y ante mesas directivas de casilla:

Actividad	Fecha/Periodo
Solicitud de cuentas de acceso por parte de los <i>PPN</i> .	Del 18 de enero al 15 de marzo de 2021
Entrega de cuentas, previa solicitud, a las representaciones ante el <i>Consejo General</i> de los <i>PPN</i> .	Del 18 de enero al 22 de marzo de 2021
Límite para que los <i>PPN</i> puedan solicitar por escrito a la DEOE la distribución de sus cuentas a sus representantes en los CD	23 de marzo de 2021

⁷¹ Consulta disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114663/CGor202009-30-ap-19-Gaceta.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

Actividad	Fecha/Periodo
Pruebas de acceso y simulacro.	Del 1 al 9 de abril de 2021
Inicio de registro de solicitudes/sustitución de representantes (registro individual y/o carga por lote)	16 de abril de 2021
Inicio de cruces de información	21 de abril de 2021
Límite para carga por lote.	24 de mayo de 2021
Límite para sustituciones por lote.	24 de mayo de 2021
Límite para registro individual.	24 de mayo de 2021
Ajuste de número de representantes generales	Del 25 al 27 de mayo de 2021
Límite para sustituciones individuales	27 de mayo de 2021
Fecha para asentar firma digitalizada y sellos digitales en los nombramientos.	28 de mayo de 2021
Fecha a partir de la que se pueden realizar consultas y, en su caso, descarga e impresión de nombramientos con firma digitalizada y sellos digitales.	29 de mayo de 2021

Lo anterior, bajo el modelo para la operación del sistema que incluye los rubros siguientes:

“Fase I. Solicitud de acceso al Sistema

Los PP⁷² deberán presentar por escrito la solicitud para obtener las cuentas de acceso al Sistema, tanto a nivel central como distrital en el periodo que comprende del 18 de enero de 2021 y hasta el 15 de marzo del mismo año, con la finalidad de garantizar su participación en las pruebas y simulacros del Sistema. Las CI⁷³ realizarán la solicitud una vez que se apruebe su candidatura en el SNR.⁷⁴

⁷² Partidos Políticos Nacionales y Locales.

⁷³ Candidaturas Independientes.

⁷⁴ Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos.

Los PPN⁷⁵ realizarán la solicitud a través de sus representaciones ante el *Consejo General*; mientras que la CI del ámbito federal la presentarán ante el CD⁷⁶ correspondiente. Los PPL⁷⁷ y CI del ámbito local solicitarán por escrito al Consejo General del OPL⁷⁸ correspondiente las cuentas y contraseñas de acceso al Sistema; dicha solicitud se remitirá inmediatamente por el OPL a la UTVOP⁷⁹ por medio de la JLE⁸⁰. La UTVOP deberá hacerlas llegar dentro de las siguientes 24 horas a la DEOE⁸¹ para la gestión correspondiente.

Fase 2. Generación y distribución de cuentas de acceso.

A partir del 18 de enero de 2021, la DEOE gestionará ante la UTSI⁸² la generación de las cuentas y claves de acceso para los PPN, PPL, y su en caso CI del ámbito federal y local; mismas que, en el caso de los PPN se entregarán, previa solicitud, a su representación ante el *Consejo General*, a más tardar el 22 de marzo de 2021.

Los PPN a más tardar el 23 de marzo de 2021, podrán solicitar por escrito a la DEOE la distribución de sus cuentas a sus representaciones en los CD, misma que se realizará por medio de los órganos desconcentrados, quienes recabarán los acuses y los remitirán a la DEOE dentro de las 24 horas siguientes.

La DEOE notificará a los órganos desconcentrados del Instituto sobre la entrega de las cuentas de acceso, para que la o el Vocal Secretario del CD, a su vez, lo comunique a las y los representantes de los PPN; en su caso, la o el Vocal Secretario entregará las cuentas y claves de acceso correspondientes al Sistema, a la persona acreditada por los PPN o CI, recabará el acuse correspondiente y lo remitirá inmediatamente por correo electrónico a la JLE, ésta a su vez lo enviará a la DEOE.

Las cuentas de acceso de los PPL y CI del ámbito local serán entregadas por la DEOE a la UTVOP para que, a su vez, se hagan llegar al OPL por medio de la JLE. Cuando los PPL o CI del ámbito local reciban sus cuentas y claves, se recabará el acuse y se remitirá de manera inmediata a la DEOE por la misma vía de entrega.

⁷⁵ Partidos Políticos Nacionales.

⁷⁶ Consejos Distritales.

⁷⁷ Partidos Políticos Locales.

⁷⁸ Organismos Públicos Locales.

⁷⁹ Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

⁸⁰ Juntas Locales Ejecutivas.

⁸¹ Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

⁸² Unidad Técnica de Servicios de Informática.

Las cuentas de acceso de las CI del ámbito local serán entregadas a los OPL, a más tardar 72 horas después de que sean aprobadas en el SNR.

Los OPL tendrán 24 horas para entregarla a la candidatura que corresponda, siempre y cuando medie la solicitud señalada en la Fase 1.

Fase 3. Captura de responsables del registro

Recibidas las cuentas de acceso, los PP y, en su caso, las CI podrán dar de alta en el Sistema a la persona responsable del registro de solicitudes y sustituciones de sus representantes a partir del inicio de las pruebas de acceso señaladas en la Fase 4; dicha persona participará en los ejercicios a los que se refiere la misma fase.

Tanto la firma como el nombre de la persona que se capture como responsable del registro en el Sistema, aparecerá en las acreditaciones de los representantes generales y ante mesas directivas de casilla, como la que realiza la acreditación, por lo que los PP y CI, deberán prestar especial atención en la designación de esta figura.

Fase 4. Pruebas de acceso y simulacro de operación del Sistema

Entre el 1 y el 9 de abril de 2021 se llevarán a cabo pruebas de acceso y un simulacro, con la intención de que las personas usuarias se familiaricen con la operación del Sistema; en dichos eventos participarán PP y CI y personal de las juntas ejecutivas.

A más tardar el 19 de marzo de 2021, las JDE de las 32 entidades deberán remitir a la DEOE por conducto de la respectiva JLE, cinco cuentas de personas usuarias del personal que labora en las subdelegaciones para que participen en los ejercicios, a fin de que se familiaricen con la operación del Sistema y, en su caso, se identifiquen fallas en su funcionamiento para que se corrijan previo a su operación en producción. A su vez, para los mismos fines, las JLE remitirán tres cuentas del personal adscrito a las propias delegaciones.

Es menester resaltar que el Sistema incorpora un Centro de Ayuda con guías de uso destinadas a los diferentes usuarios para la correcta operación; no obstante, las representaciones de los actores políticos podrán acudir con las presidencias de los CD y CL a fin de solicitar asesorías sobre el funcionamiento del Sistema.

Una vez concluidas las pruebas de acceso y el simulacro, la DEOE cancelará los permisos de captura de las cuentas de usuario del personal de las juntas ejecutivas; manteniendo activas únicamente las de las personas titulares de las vocalías Ejecutiva y del Secretario.

Fase 5. Modalidades para la captura

Los PP y CI, realizarán la captura de la información de sus representantes en las modalidades siguientes:

- a) En una plantilla en Excel, que podrán descargar del Centro de Ayuda del Sistema, o que les proporcionará la JDE o, en su caso la JLE, la cual les permitirá incorporar información de sus representantes fuera de línea, una vez concluida la captura, la plantilla les generará un archivo cifrado que podrán subir al Sistema.
- b) Directamente en el Sistema a través de captura individual, es decir, un representante a la vez.
- c) Carga al Sistema por lotes, a través de archivos de texto, esta opción les permitirá ingresar al Sistema uno o más registros en una sola operación. A través del validador disponible en el Centro de Ayuda del Sistema y dentro del Sistema en los módulos de "Registro masivo (txt)" y "Sustitución masiva (txt)" que, en su caso, también podrá proporcionar la JDE, procesarán sus propios archivos de texto plano para verificar su estructura y generar archivos cifrados, para cargar al Sistema.

Se debe considerar lo siguiente:

- El Sistema permitirá cargar cada archivo sólo una vez.
- Durante el periodo de captura y hasta el cierre de sustituciones, los cruces se realizarán continuamente.
- Durante el periodo de registro, y hasta el periodo de sustituciones se pueden capturar representantes.
- Los PP y CI contarán con una herramienta que les permita validar los archivos de texto plano, previo a su carga en el Sistema, con la finalidad de garantizar que el archivo esté adecuadamente conformado y cumpla con las características necesarias para el registro de información.

Plazos de registro de solicitudes

Del 16 de abril y hasta el 24 de mayo de 2021, los PP y CI podrán realizar la captura de solicitudes de acreditación de representantes; dentro de dicho periodo se permitirá la carga de solicitudes individual y por lote, en los términos precisados en esta fase.

Fase 6. Número de representantes a acreditar

Los PPN podrán acreditar a dos representantes propietarios y dos suplentes ante cada mesa directiva de casilla. Los PPL y CI, podrán acreditar a un representante propietario y un suplente ante cada casilla.

Los PP y CI podrán acreditar a un representante general por cada 10 casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas no urbanas, del Distrito Electoral uninominal o en el ámbito territorial de su interés jurídico, tal y como lo señala el artículo 255 del RE.⁸³

Toda vez que la determinación del número, ubicación e integración de casillas es un elemento fundamental para el inicio del registro de representantes, pues con base en dicha determinación, la cifra de representantes generales deriva del número y tipo de casillas aprobadas por Distrito para la elección de que se trate, y debido a que, esta cifra puede variar por causas supervenientes, el número de representantes se presentará desde el inicio de la operación del Sistema, conforme a la aprobación de casillas existentes, tomando como base el número y tipo de casillas aprobadas por Distrito Electoral federal, local o municipio. Lo anterior bajo el principio de máxima representación, conforme a lo establecido en el artículo 255, numerales 6 y 7 del RE.

En el caso de las representaciones de los PPN ante casilla, el Sistema permitirá registrar dos propietarios y dos suplentes, por lo que no podrá registrarse mayor número de solicitudes para su acreditación. En lo que respecta a los PPL y CI, el sistema solo permitirá el registro de un representante propietario y un suplente.

En aquellos casos en los que los PP o CI, registren un mayor número de solicitudes de representantes generales a las que se tiene derecho, las y los secretarios de los CD, acreditarán a las personas que fungirán como representantes generales y que no tengan observaciones como resultado de los cruces de información que se

⁸³ Reglamento de Elecciones.

mencionan en la Fase 7 de este Modelo, respetando el orden en el cual fueron registrados y se presentan en el Sistema, hasta llegar al número máximo a acreditar.

Las secretarías de los CD podrán realizar el ajuste del número de representantes generales, solicitando al PP o CI correspondiente, señalen cuales de las solicitudes registradas serán las que deban acreditarse; para ello, es necesario tener cuidado de que las que señalen, no tengan observaciones como resultado de los cruces de información que se mencionan en la Fase 7 de este Modelo, el periodo para que los actores políticos señalen a las personas que fungirán como representantes generales será del 25 al 27 de mayo de 2021.

Fase 7. Cruces de información

Una vez que la persona usuaria complete el registro de la solicitud de acreditación, el cual podrá verificar en el Sistema, se comenzarán a realizar los cruces de información.

Dentro de las 48 horas siguientes a la captura, las personas usuarias podrán revisar en el módulo de consulta si las solicitudes cuentan o no con posibles causales de rechazo.

En todo momento se podrán realizar sustituciones de registros, siempre y cuando lo hagan, a más tardar el 27 de mayo de 2021, conforme a la Fase 9 del presente Modelo.

Los cruces de información se realizarán considerando lo siguiente:

- A más tardar el 18 de abril de 2021, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará a la UTSI la Lista Nominal de Electores Definitiva con corte al 10 de abril de 2021, misma que servirá de base para la validación de representantes. Los cruces de información se realizarán a partir del 21 de abril de 2021.

De igual manera, se deberán aplicar por las áreas del Instituto que participan, así como las representaciones partidistas los mecanismos de control, seguridad y rastreabilidad necesarios para resguardar la confidencialidad de la información entregada y contenida en dichos instrumentos, a fin de evitar algún uso distinto al expresamente previsto en la normatividad, así como evitar su alteración, pérdida, transmisión y uso no autorizado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

- El 21 de abril de 2021, el Sistema iniciará las validaciones contra la LNED⁸⁴, para determinar si puede continuar con el proceso de registro y el derecho de votación de las y los representantes en la casilla en que serán registrados.
- A partir de ese momento, el Sistema iniciará con los cruces de los datos de los representantes contenidos en las solicitudes de registro de acreditación que se encuentran en la LNED, contra las siguientes bases de datos:
 - Funcionario o funcionaria de Mesa Directiva de Casilla (FMDC),
 - Listas de reserva de FMDC,
 - Sustituciones de FMDC,
 - SE⁸⁵ y CAE⁸⁶,
 - Listas de reserva de SE y CAE,
 - Observadores Electorales,
 - Candidaturas aprobadas,
 - Representantes de otros PPL, PPN y CI.

En el caso específico de los cruces que se realicen contra las listas de reserva de SE y CAE, y que resulten con observación, esto no deberá entenderse como una causal de rechazo, sino solamente como una alerta de su posible cambio de estatus a SE o CAE, por lo que las y los secretarios de los CD deberán acreditar las solicitudes que se encuentren en este supuesto.

Por otra parte, para garantizar la integración de las MDC⁸⁷, ningún ciudadano o ciudadana que haya sido designada como FMDC podrá ser acreditada como representante de PP o CI, ya sea que haya aceptado el nombramiento, sido sustituida, o bien, se encuentre en lista de reserva; razón por la cual, los CD deberán negar la acreditación de dichos ciudadanos y ciudadanas como representantes.

En cuanto a las y los ciudadanos que hayan sido acreditados por un PP o CI previamente, prevalecerá lo señalado en el artículo 261, numeral 1, inciso i) del RE; a excepción de cuando exista manifestación por escrito del ciudadano o ciudadana de su intención por ser representante de otro partido y ésta se presente a más tardar dentro del periodo de sustituciones, garantizando la protección de sus derechos en todo momento.

⁸⁴ Lista Nominal de Electores Definitiva.

⁸⁵ Supervisores Electorales.

⁸⁶ Capacitadores Asistentes Electorales.

⁸⁷ Mesas Directivas de Casilla.

Fase 8. Resultados

A partir del 24 de abril de 2021, los PP y CI serán responsables de verificar constantemente en el Sistema, el estatus de sus representantes registrados (con causal de rechazo y sin causal de rechazo).

De existir cambios en los Sistemas de Observadores Electorales, CAE y SE, Funcionarios de Casilla y Registro de Candidatos, se realizarán nuevamente los cruces contra los representantes con causal de rechazo y sin causal de rechazo, para que, en su caso, los PP y CI realicen las sustituciones dentro del plazo establecido.

Los resultados de los cruces de información serán de carácter definitivo una vez que haya concluido la etapa de acreditaciones, es decir, a partir del 29 de mayo de 2021.

Fase 9. Sustituciones

El Sistema permitirá realizar la sustitución de representantes de forma individual y por lote desde el primer día de registro y hasta el 24 de mayo de 2021; durante el periodo exclusivo para sustituciones 25, 26 y 27 de mayo, sólo podrán realizarlas de forma individual.

Fase 10. Acreditación de representantes, generación e impresión de listados de representantes ante MDC y generales.

A partir de las 08:00 horas del 28 de mayo de 2021, toda vez que ha concluido el periodo de sustituciones, las y los secretarios de los CD ingresarán al sistema para:

- a) Acreditar a las y los representantes y generar los nombramientos definitivos con la firma digitalizada y su correspondiente sello digital.
- b) Generar los listados de representantes generales y ante mesa directiva de casilla que acompañarán los paquetes electorales federales.

Durante el proceso de acreditación de las representaciones, las y los secretarios de los CD deberán identificar aquellas solicitudes de acreditación que presenten observaciones por encontrarse en las bases de datos, debiendo atender lo dispuesto en el artículo 261, numeral 1, inciso h) del RE, para que en el supuesto de que algún PP o CI, pretenda registrar como representante general o ante MDC, a persona ciudadana que haya sido acreditada como observador electoral o

contratada como SE o CAE, requieran a la persona ciudadana que exprese por cuál opción se pronuncia. Si la persona interesada manifiesta su decisión de participar como observadora electoral, SE o CAE, le será notificado al PP o CI para que realice la sustitución correspondiente, siempre y cuando se encuentre dentro del periodo establecido para sustituciones. Si la persona ciudadana manifiesta que su decisión es actuar como representante, se dejará sin efectos su acreditación como observador electoral, SE o CAE, según el caso. Si no se recibiera respuesta alguna, o no fuera posible contactar a la persona ciudadana, el Instituto mantendrá vigente la acreditación que hubiera otorgado a ésta. En el caso de que la persona ciudadana se encuentre en lista de reserva de SE o CAE; en atención de lo que se señala en la Fase 7 de este Modelo se procederá a realizar la acreditación como representante.

Una vez concluido el proceso de acreditación, las y los presidentes de los CD deberán garantizar que se proceda a generar desde el Sistema los listados de representantes ante MDC y generales, imprimirlos, clasificarlos e integrarlos a la documentación electoral federal que se debe entregar a las presidencias de las mesas directivas de casilla.

Adicionalmente, para facilitar el registro durante la Jornada Electoral de la asistencia, de la votación de las y los representantes por parte de las y los secretarios de las MDC, y la colecta de información sobre la asistencia por parte de las y los CAE para realizar su reporte al SIJE⁸⁸, el órgano encargado de integrar la documentación electoral federal para entregarla a las presidencias de MDC, deberá agrupar con la Lista Nominal correspondiente, la relación de las representaciones de PP y CI acreditadas

ante las MDC respectivas. Concluido el escrutinio y cómputo de la casilla, las relaciones de representantes de PP y CI se introducirán en la bolsa para lista nominal de electores; con ello se garantiza que dichas relaciones sean devueltas a los Consejos Distritales correspondientes.

Fase 11. Nombramientos definitivos

A partir del 29 de mayo de 2021, las personas responsables del registro de las y los representantes de los PP y CI podrán consultar y, en su caso, descargar e imprimir los nombramientos definitivos con la firma digitalizada y su correspondiente sello digital; del mismo modo, la información estará disponible en el Sistema para consulta de los consejos, juntas ejecutivas y Oficinas Centrales.

⁸⁸ Sistema de Información de la Jornada Electoral.

Fase 12. Presencia de Representantes en casilla

Toda vez que las listas de representantes de los PP y CI estarán integradas a los paquetes electorales, no será necesario que las y los ciudadanos que ostentan la representación lleven impreso su nombramiento. No obstante, las y los representantes deberán llevar su credencial para votar, para identificarse ante la Presidencia de la MDC y ejercer su derecho al sufragio en la casilla en la que sean acreditados, de acuerdo con lo que señale la relación de representantes.

Ahora bien, respecto a la obligación contenida en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización, consistente en el pago por concepto de la actividad desplegada por los representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral, los PP y CI deberán estarse a lo previsto en el ordenamiento que se emita para tal efecto.

La información en materia de fiscalización que se incorpore al Sistema, así como la posible apertura de los módulos correspondientes en fechas posteriores a la establecida en el presente Acuerdo, estarán bajo la supervisión y coordinación de la UTF, por lo que cualquier duda respecto a la incorporación de la información o sobre el contenido de ésta en los citados módulos, deberá consultarse con la UTF.

La asistencia de las representaciones de los PP y CI en las casillas durante la Jornada Electoral se tomará conforme a lo que establece el *Programa de Operación del SIJE 2021*, para lo cual, preferentemente, las y los representantes deberán presentar su credencial para votar al identificarse ante la presidencia de MDC, y en su caso, ejercer su derecho al sufragio en la casilla en que sean acreditados de acuerdo con lo que señale la relación de representantes.

Adicionalmente, a más tardar el 16 de julio de 2021 las JDE capturarán las asistencias de las y los representantes en las casillas, tomando la información tanto de las actas de la Jornada Electoral como de las de Escrutinio y Cómputo de la elección federal.

F) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

El derecho humano a la vida privada o a la intimidad, se tutela de manera general en los artículos 6 y 16, de la *Constitución* y en los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado el Estado mexicano, de conformidad con los artículos 1º y 133 de nuestra Carta Magna.

En ese sentido, los artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la vida privada de las personas, conforme al cual, deben reservarse sus datos personales y la demás información relativa a su vida privada que estén en poder de algún ente público o de particulares, y protegerse de la posible utilización indebida por terceros.

A su vez, el artículo 6, base A, fracción II, de la *Constitución* establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes.

El artículo 16 constitucional, en sus dos primeros párrafos, dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; y que **toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley**, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

En ese sentido, con la reforma al artículo 16 constitucional se hace referencia a la existencia de principios a los que se debe sujetar todo tratamiento de datos personales, así como los supuestos en los que excepcionalmente dejarían de aplicarse dichos principios. Dentro de los más importantes podemos señalar los de licitud, proporcionalidad, calidad seguridad y finalidad.

Licitud: el tratamiento de datos personales deberá obedecer exclusivamente a las facultades, atribuciones o competencias que la normatividad aplicable les confiere.

Proporcionalidad: sólo se deberán tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.

Calidad: implica, entre otras cuestiones, que los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, y deberán atender a las disposiciones aplicables a la materia de que se trate.

Seguridad: se deberán establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción, o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Finalidad: los datos personales en posesión de los responsables deberán tratarse únicamente para la o las finalidades para las cuales fueron obtenidos. Dichas finalidades deberán ser concretas, lícitas, explícitas y legítimas.

Además de los principios anteriormente enlistados, existen principios internacionales complementarios en materia de protección de datos que es pertinente tener presentes a la hora de resolver el presente procedimiento.

Límite de uso: consiste en no divulgar los datos personales o aquellos utilizados para propósitos distintos para los que fueron recabados.

Protección a la seguridad: consiste en proteger los datos personales e información, mediante mecanismos razonables de seguridad en contra de riesgos, como pérdida, acceso no autorizado, destrucción, utilización, modificación o divulgación de datos.

Responsabilidad: consiste en la responsabilidad del controlador de datos de cumplir efectivamente con medidas suficientes para implementar los principios anteriormente enunciados.

Como se advierte, el derecho a la intimidad está relacionado con una adecuada normativa en materia de protección de datos personales al tratarse estos de derechos fundamentales cuya vulneración podría poner en riesgo incluso a la persona misma.

La afirmación anterior tiene sustento debido a que el conjunto de datos personales puede generar no sólo la identificación de la persona a la cual pertenecen, sino la

posibilidad de inferir a partir de ellos, datos sensibles de las personas como lo son religión, raza o grupo étnico, estado de salud, situación financiera, etcétera, lo que podría poner en riesgo al sujeto tutelado.

Así, el siete de febrero de dos mil catorce, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 6 de la *Constitución*, la cual fija las bases para la creación de una ley general de protección de datos personales.

En otro orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el Amparo directo en revisión 2420/2011, entre otras cuestiones, que **ese consentimiento debe otorgarse de manera expresa, por tanto, la autoridad deberá objetivarlo por escrito o mediante cualquier otro procedimiento que facilite su prueba y denote un consentimiento claro e indudable.**

Asimismo, la Suprema Corte en el diverso amparo directo en revisión 1656/2011 y en la contradicción de tesis 38/2012, determinó que el derecho al respeto de la vida privada deriva de la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad principal es el reconocimiento a un ámbito de vida privada personal y familiar que, por regla general, debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás. Tal derecho puede extenderse a una protección que va más allá del domicilio, como espacio físico en que normalmente se desenvuelve la vida privada, puesto que puede abarcar papeles, posesiones, datos personales del gobernado.

Bajo dicha lógica, la Suprema Corte ha establecido que los rasgos característicos de la noción de lo “privado” se relacionan con: a) lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; c) lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; d) las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; y, e) aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos.

En cuanto a la vida privada, en un ámbito más amplio y derivado del desarrollo tecnológico, se advierte que se pueden vulnerar otros aspectos de la esfera de la persona, tal como sus datos personales.

Ahora bien, en cuanto al derecho a la intimidad, la Suprema Corte ha determinado en los criterios apuntados, que este se asocia con la existencia de un ámbito privado que se encuentra reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, y tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida

frente a la acción y conocimiento de terceros, ya sea por parte de particulares o por los poderes del Estado.

Tal derecho atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado por el individuo para sí y su familia; asimismo, garantiza el derecho a la intimidad a efecto de disponer del control sobre la publicidad de la información tanto de la persona como de su familia; lo que se traduce en el derecho de la autodeterminación de la información que supone la posibilidad de elegir qué información de la esfera privada de la persona puede ser conocida, y cuál debe permanecer en secreto, **así como designar quién y bajo qué condiciones puede utilizar esa información.**

En este orden de ideas, la normativa en la materia define los *datos personales* como la información concerniente a una persona física identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, el estado de salud físico o mental, las preferencias sexuales, u otras análogas, que afecten su intimidad.

El *Tribunal Electoral*, ha sostenido que el derecho a la vida privada de las persona, concede a su titular, la atribución de resguardar ese ámbito privado, **con el poder de decidir sobre la publicidad de los datos de su persona, lo que supone la facultad de elegir cuáles pueden ser conocidos y cuáles deben permanecer en reserva, además de designar quién y bajo qué modalidades pueden utilizarlos**, dado que la protección de datos personales incluye el derecho de autodeterminación informativa como uno de los fines para propiciar la confiabilidad en el manejo y cuidado de las referencias concernientes a las personas en el ámbito de su vida privada, así el Estado a través de sus órganos adoptará las medidas tendentes a hacer efectiva la tutela del referido derecho.

A su vez, la Sala Regional Especializada ha sostenido que “las leyes respectivas en materia de transparencia y tratamiento de datos personales deben considerar el consentimiento del titular (consentimiento informado), es decir, dar a conocer claramente la finalidad y el propósito del almacenamiento de sus datos y la posibilidad de que éstos sean dados a conocer a terceros.”

- **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**

En el artículo 23, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, **partidos políticos**, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

El artículo 68 de la misma Ley, establece que los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Por último, en el artículo 68 de dicha Ley se establece que los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión.

Además, el artículo 116 de la ley en comento, así como el diverso 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

De lo anterior, medularmente, se obtiene lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Para militar en **MORENA**, los mexicanos, mujeres y hombres, deberán aceptar y suscribir los Documentos Básicos y sus políticas específicas.
- Para estar afiliado a **MORENA**, los mexicanos mujeres y hombres deberán aceptar la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos y deberán de colaborar con algunas tareas del Partido, especialmente las electorales.
- Uno de los requisitos formales para afiliarse a **MORENA**, consiste en presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria correspondiente.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- En el Acuerdo **INE/CG33/2019**, se ordenó instaurar, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación.

- En la referida determinación, se instruyó a los partidos políticos que, de manera inmediata, dieran de baja definitiva de su padrón de militantes, los datos de aquellas personas que, anterior a la emisión del Acuerdo aludido, hayan presentado queja por indebida afiliación o por renuncia que no hubieran tramitado.

3. Carga y estándar probatorio sobre vulneración al derecho de libre afiliación a un partido político.

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un/a ciudadano/a pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante de **MORENA**, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso, MORENA), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el/la ciudadano/a en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos, y por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental, y en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,⁸⁹ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,⁹⁰ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria⁹¹ y como estándar probatorio.⁹²

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁹³ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúan la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su

⁸⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

⁹⁰ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

⁹¹ Tesis de Jurisprudencia: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁹² Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

⁹³ Véanse las tesis *PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA*, *PRESUNCIÓN DE INOCENCIA*, así como *DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO*.

vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación de las personas quejas versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIFE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y,

consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento de la persona denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. Hechos acreditados

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por las personas denunciantes versan sobre la presunta transgresión **al derecho de libre afiliación y, en algunos casos, por el posible abuso del ejercicio del derecho constitucional y legal del partido político denunciado, de nombrarlos como sus representantes ante una Mesa Directiva de Casilla, utilizando indebidamente sus datos personales**, para tal fin, atribuible a **MORENA**.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, en el siguiente cuadro se resumirá, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas:

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
1	Axel Martínez Betanzos	04 de enero de 2022 ⁹⁴	<p>Correo electrónico de 16 de febrero de 2022</p> <p>Afiliación: 23/02/2013</p> <p>Fecha baja: 10/02/2022</p> <p>Fecha de cancelación: 15/02/2022</p>	<p>Escrito⁹⁵</p> <p>16 de febrero de 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informó que la persona quejosa sí fue su militante. - No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la persona denunciante. - Indicó que su registro de afiliación fue cancelado. - Fecha de afiliación 23/02/2013
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MORENA. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante, o en su caso, el formato o cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Por esta razón, la conclusión es que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁹⁴ Visible a página 6.

⁹⁵ Visible a páginas 207-211 y anexo 212-224.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
2	Mitzi Ortiz Rodríguez	11 de enero de 2022 ⁹⁶	Correo electrónico de 16 de febrero de 2022 Afiliación: 20/04/2013 Fecha baja: 10/02/2022 Fecha de cancelación: 15/02/2022	Escrito⁹⁷ 16 de febrero de 2022 - Informó que la persona quejosa sí fue su militante. - No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la persona denunciante. - Indicó que su registro de afiliación fue cancelado. - Fecha de afiliación 20/04/2013
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MORENA. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, el formato o cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Por esta razón, la conclusión es que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
3	Israel Ávila Salgado	11 de enero de 2022 ⁹⁸	Correo electrónico de 16 de febrero de 2022 Afiliación: 20/10/2014 Fecha baja: 10/02/2022 Fecha de cancelación: 15/02/2022	Escrito⁹⁹ 16 de febrero de 2022 - Informó que la persona quejosa sí fue su militante. - No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la persona denunciante. - Indicó que su registro de afiliación fue cancelado. - Fecha de afiliación 20/10/2014
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MORENA. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, el formato o cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Por esta razón, la conclusión es que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
4	Diana Ángeles Lara Trujillo	11 de enero de 2022 ¹⁰⁰	Correo electrónico de 16 de febrero de 2022 Afiliación: 15/11/2017 Fecha baja: 10/02/2022 Fecha de cancelación: 15/02/2022	Escrito¹⁰¹ 16 de febrero de 2022 - Informó que la persona quejosa sí fue su militante. - No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la persona denunciante. - Indicó que su registro de afiliación fue cancelado. - Fecha de afiliación 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p>				

⁹⁶ Visible a página 20.

⁹⁷ Visible a páginas 207-211 y anexo 212-224.

⁹⁸ Visible a página 27.

⁹⁹ Visible a páginas 207-211 y anexo 212-224.

¹⁰⁰ Visible a página 44.

¹⁰¹ Visible a páginas 207-211 y anexo 212-224.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MORENA. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, el formato o cédula de afiliación respectiva.				
Por esta razón, la conclusión es que Sí se trata de una afiliación indebida .				

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
5	Rosa María Herrera Ledezma	13 de enero de 2022 ¹⁰²	Correo electrónico de 16 de febrero de 2022 Afiliación: 15/08/2016 Fecha baja: 10/02/2022 Fecha de cancelación: 15/02/2022	Escrito ¹⁰³ 16 de febrero de 2022 - Informó que la persona quejosa sí fue su militante. - No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la persona denunciante. - Indicó que su registro de afiliación fue cancelado. - Fecha de afiliación 15/08/2016
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MORENA. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, el formato o cédula de afiliación respectiva.				
Por esta razón, la conclusión es que Sí se trata de una afiliación indebida .				

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
6	Yesica Gutiérrez Gutiérrez	05 de enero de 2022 ¹⁰⁴	Correo electrónico de 16 de febrero de 2022 Afiliación: 27/10/2017 Fecha baja: 10/02/2022 Fecha de cancelación: 15/02/2022	Escrito ¹⁰⁵ 16 de febrero de 2022 - Informó que la persona quejosa sí fue su militante. - No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la persona denunciante. - Indicó que su registro de afiliación fue cancelado. - Fecha de afiliación 27/10/2017
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MORENA. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, el formato o cédula de afiliación respectiva.				
Por esta razón, la conclusión es que Sí se trata de una afiliación indebida .				

¹⁰² Visible a páginas 54-55.

¹⁰³ Visible a páginas 207-211 y anexo 212-224.

¹⁰⁴ Visible a página 59.

¹⁰⁵ Visible a páginas 207-211 y anexo 212-224.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
7	Dalia Karina Hernández Higareda	07 de enero de 2022 ¹⁰⁶	Correo electrónico de 16 de febrero de 2022 Afiliación: 08/12/2013 Fecha baja: 10/02/2022 Fecha de cancelación: 15/02/2022	Escrito ¹⁰⁷ 16 de febrero de 2022 - Informó que la persona quejosa sí fue su militante. - No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la persona denunciante. - Indicó que su registro de afiliación fue cancelado. - Fecha de afiliación 08/12/2013
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MORENA. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, el formato o cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Por esta razón, la conclusión es que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
8	Lourdes Elizalde Juárez	09 de diciembre de 2021 ¹⁰⁸	Correo electrónico de 16 de febrero de 2022 Afiliación: 03/09/2015 Fecha baja: 02/07/2021 Fecha de cancelación: 05/07/2021	Escrito ¹⁰⁹ 4 de marzo de 2022 - Informó que la persona quejosa sí fue su militante. - No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la persona denunciante. - Indicó que su registro de afiliación fue cancelado. - Fecha de afiliación 03/09/2015
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MORENA. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, el formato o cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Por esta razón, la conclusión es que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
9	Insdy Suárez Bautista	07 de enero de 2022 ¹¹⁰	Correo electrónico de 16 de febrero de 2022 Afiliación: 02/01/2015 Fecha baja: 27/01/2022 Fecha de cancelación: 09/02/2021	Escrito ¹¹¹ 4 de marzo de 2022 - Informó que la persona quejosa sí fue su militante. - No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la persona denunciante. - Indicó que su registro de afiliación fue cancelado. - Fecha de afiliación 02/01/2015
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p>				

¹⁰⁶ Visible a página 67.

¹⁰⁷ Visible a páginas 207-211 y anexo 212-224.

¹⁰⁸ Visible a página 74.

¹⁰⁹ Visible a páginas 390-394 y anexo 395-396.

¹¹⁰ Visible a página 79.

¹¹¹ Visible a páginas 390-394 y anexo 395-396.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MORENA. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, el formato o cédula de afiliación respectiva.				
Por esta razón, la conclusión es que Sí se trata de una afiliación indebida .				

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
10	Blanca Esmeralda Hernández Escobar	07 de enero de 2022 ¹¹²	Correo electrónico de 16 de febrero de 2022 Afiliación: 19/08/2015 Fecha baja: 10/02/2022 Fecha de cancelación: 15/02/2022	Escrito ¹¹³ 16 de febrero de 2022 - Informó que la persona quejosa sí fue su militante. - No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la persona denunciante. - Indicó que su registro de afiliación fue cancelado. - Fecha de afiliación 19/08/2015
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MORENA. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, el formato o cédula de afiliación respectiva.				
Por esta razón, la conclusión es que Sí se trata de una afiliación indebida .				

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
11	Princesa Jara Quiroz Reyes	04 de enero de 2022 ¹¹⁴	Correo electrónico de 16 de febrero de 2022 Afiliación: 26/05/2016 Fecha baja: 10/02/2022 Fecha de cancelación: 15/02/2022	Escrito ¹¹⁵ 16 de febrero de 2022 - Informó que la persona quejosa sí fue su militante. - No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la persona denunciante. - Indicó que su registro de afiliación fue cancelado. - Fecha de afiliación 26/05/2016
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MORENA. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, el formato o cédula de afiliación respectiva.				
Por esta razón, la conclusión es que Sí se trata de una afiliación indebida .				

¹¹² Visible a página 85.

¹¹³ Visible a páginas 207-211 y anexo 212-224.

¹¹⁴ Visible a página 93 (93 ambos lados).

¹¹⁵ Visible a páginas 207-211 y anexo 212-224.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
12	Ernesto Ariza Becerra	10 de enero de 2022 ¹¹⁶	Correo electrónico de 16 de febrero de 2022 Afiliación: 01/03/2013 Fecha baja: 10/02/2022 Fecha de cancelación: 15/02/2022	Escrito ¹¹⁷ 16 de febrero de 2022 - Informó que la persona quejosa sí fue su militante. - No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la persona denunciante. - Indicó que su registro de afiliación fue cancelado. - Fecha de afiliación 01/03/2013
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MORENA. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, el formato o cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Por esta razón, la conclusión es que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
13	Yessenia Valdez Jiménez	13 de enero de 2022 ¹¹⁸	Correo electrónico de 16 de febrero de 2022 Afiliación: 16/01/2016 Fecha baja: 10/02/2022 Fecha de cancelación: 15/02/2022	Escrito ¹¹⁹ 16 de febrero de 2022 - Informó que la persona quejosa sí fue su militante. - No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la persona denunciante. - Indicó que su registro de afiliación fue cancelado. - Fecha de afiliación 16/01/2016
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MORENA. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, el formato o cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Por esta razón, la conclusión es que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
14	Lucia Viridiana Guerrero Martínez	10 de enero de 2022 ¹²⁰	Correo electrónico de 16 de febrero de 2022 Afiliación: 09/04/2014 Fecha baja: 10/02/2022 Fecha de cancelación: 15/02/2022	Escrito ¹²¹ 16 de febrero de 2022 - Informó que la persona quejosa sí fue su militante. - No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la persona denunciante. - Indicó que su registro de afiliación fue cancelado. - Fecha de afiliación 09/04/2014
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p>				

¹¹⁶ Visible a página 99.

¹¹⁷ Visible a páginas 207-211 y anexo 212-224.

¹¹⁸ Visible a páginas 107-108.

¹¹⁹ Visible a páginas 207-211 y anexo 212-224.

¹²⁰ Visible a página 123.

¹²¹ Visible a páginas 207-211 y anexo 212-224.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

No	Persona	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MORENA. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, el formato o cédula de afiliación respectiva.				
Por esta razón, la conclusión es que Sí se trata de una afiliación indebida .				

No	Persona, queja y anexos	Medios de prueba recabados
15	<p>María de Lourdes Hernández García</p> <p>Escrito de 11 de enero de 2022¹²²</p> <p>Anexó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio de desconocimiento de afiliación a MORENA que presentó ante la 07 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de México.¹²³ • Copia simple de su credencial para votar.¹²⁴ • Comprobante de inscripción para el proceso de reclutamiento y selección de SE y Cae.¹²⁵ • Copia simple de su credencial como capacitadora electoral local, expedida por el Instituto Electoral del Estado de México.¹²⁶ • Copia simple del acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las diputaciones federales de la casilla 1360 C1.¹²⁷ • Copia simple de los recibos de pago expedidos a su favor de 8 y 23 de mayo de 2021, por haber ocupado el puesto de Capacitadora Electoral Local.¹²⁸ • Copia simple de los recibos de pago expedidos a su favor de 27 de mayo y 12 de junio, de 2021, por haber ocupado el puesto de Capacitadora Electoral Local.¹²⁹ • Copia simple de oficio INE-JDE07-MEX/VE/027/2022,¹³⁰ signado por el Vocal Ejecutivo de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de México, en el que se asentó: <i>le informo que Sí se encuentra registrada en el partido político MORENA como representante de partido político ante casilla, en el Distrito 11 Ecatepec de Morelos, Estado de México, ante la sección 1360 casilla Continua 1.</i> 	<p>1. Copia certificada de la “Relación de las y los representantes de los Partidos Políticos/Candidaturas Independientes ante las mesas directivas de casilla”, específicamente de la 1360 Contigua 1.¹³¹</p> <p>2. Copia certificada del nombramiento expedido a favor de María de Lourdes Hernández García como representante de partido político ante mesa directiva de la casilla 1360 Contigua 1 ubicada en la 11 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de México.¹³²</p> <p>3. Copia certificada del acta de escrutinio y cómputo del Proceso Electoral Federal 2020-2021 de la casilla 1360 Contigua 1.¹³³</p> <p>Manifestaciones del partido</p> <p>No aportó documentación que acredite el consentimiento de la denunciante para su registro</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:</p> <p>1. No existe controversia en el sentido de que María de Lourdes Hernández García fue registrada como representante suplente 2 de MORENA, en el Distrito 11-Ecatepec de Morelos, Sección 1360, Casilla Contigua 1 para el Proceso Electoral 2020-2021.</p> <p>2. MORENA no señaló ni acreditó en autos la manera en que registró a la denunciante como representante de casilla.</p>		

¹²² Visible a página 10.

¹²³ Visible a página 11.

¹²⁴ Visible a página 12.

¹²⁵ Visible a página 13.

¹²⁶ Visible a página 14.

¹²⁷ Visible a página 15.

¹²⁸ Visible a página 16.

¹²⁹ Visible a página 17.

¹³⁰ Visible a página 18.

¹³¹ Visible a página 251.

¹³² Visible a página 253.

¹³³ Visible a página 258.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

No	Persona, queja y anexos	Medios de prueba recabados
	<p>3. En la documentación utilizada en la jornada electoral para la elección a cargos del ámbito federal en el Distrito 11 con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México, no se aprecia algún registro que dé cuenta que el día de la jornada electoral que María de Lourdes Hernández García haya participado como representante ante mesa de casilla por parte de MORENA.</p> <p>4. En las respectivas actas para la elección a cargos del ámbito federal en el Distrito 11 con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México que obran en autos, se aprecia el registro de diversa persona que actuó como representante de MORENA, ante la mesa directiva de casilla en la que fue acreditada María de Lourdes Hernández García.</p> <p>5. MORENA no aportó elemento de convicción alguno que tenga como finalidad el acreditar que María de Lourdes Hernández García hubiera dado su consentimiento para ser nombrada y/o registrada como representante ante mesa directiva de casilla.</p>	
Por esta razón, la conclusión es que SÍ se trata de un registro indebido como representante ante mesa directiva de casilla .		

No	Persona, queja y anexos	Medios de prueba recabados
16	<p>María Teresa Hernández Segura</p> <p>Escrito de 6 de enero de 2022¹³⁴</p> <p>Anexó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprobante de inscripción para el proceso de reclutamiento y selección de SE y Cae.¹³⁵ • Impresión de la página de internet de la búsqueda de registro de afiliación a algún partido político, de la que se advierte que la clave de elector [...] no se encuentra registrado a alguna institución política.¹³⁶ • Copia simple de la "Relación de las y los representantes de los Partidos Políticos / Candidaturas Independientes ante las mesas directivas de casilla", específicamente de la 1342 Contigua 1.¹³⁷ • Impresión de la página de internet del INE del acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las diputaciones federales de la casilla 1342 B.¹³⁸ • Impresión de la página de internet del INE del acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las diputaciones federales de la casilla 1342 C1.¹³⁹ 	<p>1. Copia certificada de la "Relación de las y los representantes de los Partidos Políticos/Candidaturas Independientes ante las mesas directivas de casilla", específicamente de la 1342 Contigua 1.¹⁴⁰</p> <p>2. Copia certificada del nombramiento expedido a favor de María Teresa Hernández Segura como representante de partido político ante mesa directiva de la casilla 1342 Contigua 1 ubicada en la 11 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de México.¹⁴¹</p> <p>3. Copia certificada del acta de la jornada electoral del Proceso Electoral Federal 2020-2021 de la casilla 1342 Contigua 1.¹⁴²</p> <p>4. Copia certificada del acta de escrutinio y cómputo del Proceso Electoral Federal 2020-2021 de la casilla 1342 Contigua 1.¹⁴³</p>
<p style="text-align: center;">Manifestaciones del partido</p> <p style="text-align: center;">No aportó documentación que acredite el consentimiento de la denunciante para su registro</p>		
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:</p> <p>1. No existe controversia en el sentido de que María Teresa Hernández Segura fue registrada como representante suplente 1 de MORENA, en el Distrito 11-Ecatepec de Morelos, Sección 1342, Casilla Contigua 1 para el Proceso Electoral 2020-2021.</p> <p>2. MORENA no señaló ni acreditó en autos la manera en que registró a la denunciante como representante de casilla.</p>		

¹³⁴ Visible a páginas 114-115.

¹³⁵ Visible a página 116.

¹³⁶ Visible a página 117.

¹³⁷ Visible a página 118.

¹³⁸ Visible a página 119.

¹³⁹ Visible a página 120.

¹⁴⁰ Visible a página 252.

¹⁴¹ Visible a página 254.

¹⁴² Visible a página 255.

¹⁴³ Visible a página 257.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

No	Persona, queja y anexos	Medios de prueba recabados
3.	En la documentación utilizada en la jornada electoral para la elección a cargos del ámbito federal en el Distrito 11 con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México, no se aprecia algún registro que dé cuenta que el día de la jornada electoral que María Teresa Hernández Segura haya participado como representante ante mesa de casilla por parte de MORENA.	
4.	En las respectivas actas para la elección a cargos del ámbito federal en el Distrito 11 con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México que obran en autos, se aprecia el registro de diversa persona que actuó como representante de MORENA, ante la mesa directiva de casilla en la que fue acreditada María Teresa Hernández Segura .	
5.	MORENA no aportó elemento de convicción alguno que tenga como finalidad el acreditar que María Teresa Hernández Segura hubiera dado su consentimiento para ser nombrada y/o registrada como representante ante mesa directiva de casilla.	
Por esta razón, la conclusión es que Sí se trata de un registro indebido como representante ante mesa directiva de casilla .		

El correo electrónico aportado por la *DEPPP*, así como la documentación **recabada** por la autoridad sustanciadora, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas y Denuncias del INE*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, así como por las y los denunciantes, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento de Quejas y Denuncias del INE*; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. Caso concreto.

Precisado lo anterior, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados:

APARTADO A. CATORCE PERSONAS QUE FUERON INDEBIDAMENTE AFILIADOS A MORENA

Se acredita la infracción de MORENA, respecto de las personas denunciantes que se citan a continuación, por las razones y consideraciones siguientes:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

C.	PERSONA
1	Axel Martínez Betanzos
2	Mitzi Ortiz Rodríguez
3	Israel Ávila Salgado
4	Diana Ángeles Lara Trujillo
5	Rosa María Herrera Ledezma
6	Yesica Gutiérrez Gutiérrez
7	Dalia Karina Hernández Higareda
8	Lourdes Elizalde Juárez
9	Insdy Suárez Bautista
10	Blanca Esmeralda Hernández Escobar
11	Princesa Jara Quiroz Reyes
12	Ernesto Ariza Becerra
13	Yessenia Valdez Jiménez
14	Lucia Viridiana Guerrero Martínez

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por las personas quejasas, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de las y los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliados, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales* para la conservación de su Registro, identificados con el número de resolución CG617/2012, y de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento de la persona para cualquier caso— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde a la persona quejosa.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Sin embargo, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la *Sala Superior*, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de las personas quejasas para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes de MORENA.

Por lo que, en el caso concreto, la carga de la prueba corresponde al denunciado, en tanto que el dicho de las personas denunciadas consiste en que no dieron su consentimiento para ser militantes de MORENA, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que **las personas denunciadas** se encontraron, en ese momento, como afiliadas de *MORENA*.

Por otra parte, MORENA **reconoce la afiliación de las catorce personas denunciadas**, sin presentar medios de prueba para acreditar que la afiliación fue el resultado de la manifestación de la voluntad libre e individual de las personas denunciadas, en los cuales *motu proprio* (decisión propia), expresaron su

consentimiento, y por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Esto es, en el caso, MORENA:

- **No adjuntó las cédulas de afiliación correspondientes, ni algún otro medio de convicción tendente a acreditar su dicho.**

Además, cuando la autoridad instructora requirió a MORENA que presentara el expediente de afiliación, argumentó que después de haber realizado la búsqueda de la documentación no había sido posible su localización y, por tanto, su entrega.

Al respecto es de señalarse que la falta de organización al interior de un partido político **no es un excluyente de responsabilidad** para dejar de cumplir con sus obligaciones constitucional y legamente establecidas, por el contrario, como ente de interés público está obligada a acatar la ley en todo momento, respetando los derechos políticos de la ciudadanía, en el caso, tiene el deber de contar con la documentación soporte que justifique la debida afiliación de las **catorce personas denunciantes**, en la que constara la manifestación de su voluntad.

Sobre ello, la *Sala Superior* en la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, para resolver el recurso de apelación SUP-RAP-427/2021, sostuvo que, el partido político “se encontraba obligado [a] conservarla y resguardarla, puesto que le correspondía la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios exigidos,” cuestión que, en el caso, MORENA no cumplió.

Por otra parte, respecto a **seis personas denunciantes**, MORENA manifestó que las afiliaciones de **Axel Martínez Betanzos, Ernesto Ariza Becerra, Mitzi Ortiz Rodríguez, Dalia Karina Hernández Higareda, Lucía Viridiana Guerrero Martínez e Israel Ávila Salgado fueron realizadas en el proceso constitutivo y de formación de partido político nacional (2013 y 2014)**, es decir, las afiliaciones **fueron realizadas en las asambleas constitutivas de MORENA como partido político nacional** y que para tal efecto obligaba a su realización y verificación por parte de los funcionarios que para tal efecto hubiere designado esta autoridad electoral.

Sin embargo, en los archivos de este Instituto obra correo electrónico en el que la DEPPP, ¹⁴⁴ entre otras cuestiones, **informó que, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, fue destruida la documentación relativa a las treinta asambleas celebradas por dicho partido durante el proceso de constitución, así como las listas de afiliados y manifestaciones formales de afiliación presentadas como anexo a la solicitud de registro como Partido Político Nacional**, lo anterior, toda vez que ningún representante de MORENA se presentó por la documentación, no obstante haber sido requeridos para ello, en diversas ocasiones.

En ese sentido, debe señalarse que, obran en autos constancias de las que se desprende que, la citada autoridad electoral requirió a ese partido para que recibieran los expedientes originales de las asambleas constitutivas y que, como lo estableció la autoridad, los representantes partidistas no atendieron la solicitud.

En efecto, en los archivos del *INE* se cuenta con copia certificada del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0225/2016, de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, que fue notificado a MORENA según se advierte en la propia constancia, y en la que se le previno al partido político que, de no acudir a recibir tales documentos, los mismos serían destruidos.¹⁴⁵

En tal sentido, en los archivos también se cuenta con el Acta circunstanciada de dieciséis de enero de dos mil diecisiete¹⁴⁶ levantada con motivo de la destrucción de los referidos expedientes, a partir de lo cual se puede concluir que, esta autoridad, después de concluir la revisión de la documentación constitutiva del partido político denunciado, la puso a su disposición y al no recibir respuesta, procedió a su eliminación.

Por tanto, el argumento del denunciado se desvirtúa ya que, como se evidencia, la propia representación partidista fue omisa en recibir los documentos que había entregado a la autoridad en el proceso de obtención del registro como partido político, sin que la autoridad hubiera tenido en modo alguno, la responsabilidad del resguardo de tales constancias por tiempo indefinido.

Además de lo anterior, debe destacarse que, de las constancias que obran en autos, **no se advierte que MORENA haya implementado alguna medida para reponer**

¹⁴⁴ Visible a páginas 70-72 del expediente UT/SCG/Q/ORA/JD06/BC/51/2019, resuelto por este Consejo General el siete de octubre de dos mil veinte, con clave de resolución INE/CG355/2020. Consulta disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114877/CGex202010-07-rp-1-70.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹⁴⁵ Visible a página 129 del expediente UT/SCG/Q/ORA/JD06/BC/51/2019.

¹⁴⁶ Visible a página 130 del expediente UT/SCG/Q/ORA/JD06/BC/51/2019.

las constancias de afiliación, con el objeto de cumplir con la normatividad general y la interna, para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, aún a pesar de que ello fue uno de los fines torales de la aprobación del acuerdo INE/CG/33/2019, sobre el cual, el partido hoy denunciado tenía la obligación de cumplir a cabalidad.

En suma, el argumento de MORENA, en el sentido de que las constancias que se le exigen para acreditar la afiliación de las **catorce personas denunciantes** (Axel Martínez Betanzos, Mitzi Ortiz Rodríguez, Israel Ávila Salgado, Diana Ángeles Lara Trujillo, Rosa María Herrera Ledezma, Yesica Gutiérrez Gutiérrez, Dalia Karina Hernández Higareda, Lourdes Elizalde Juárez, Insdý Suárez Bautista, Blanca Esmeralda Hernández Escobar, Princesa Jara Quiroz Reyes, Ernesto Ariza Becerra, Yessenia Valdez Jiménez y Lucía Viridiana Guerrero), obran en poder de este propio Instituto, pierde todo valor ante los argumentos que se han señalado en los párrafos anteriores, de las que se desprende con total claridad que, si bien es cierto, esta autoridad tuvo en su poder documentos originales relacionados con las Asambleas celebradas para la constitución del partido político; también lo es que, la devolución de tales constancias fue ofrecida a MORENA de manera oportuna, sin que los dirigentes y/o representantes de ese partido político hayan evidenciado interés de recuperar tales constancias, ni tampoco reponerlas posteriormente de conformidad con el acuerdo de este *Consejo General* referido en el párrafo anterior.

Aunado a lo anterior, es de destacarse que **no existe certeza de que la documentación relativa a la afiliación de Axel Martínez Betanzos, Ernesto Ariza Becerra, Mitzi Ortiz Rodríguez, Dalia Karina Hernández Higareda, Lucía Viridiana Guerrero Martínez e Israel Ávila Salgado haya sido entregada a esta autoridad**, y por consiguiente, esa fuese parte del material destruido de conformidad con lo informado por la *DEPPP*.

Criterio similar, adoptó este *Consejo General* al emitir, entre otras, la resolución **INE/CG75/2022**, de cuatro de febrero de dos mil veintidós, que resolvió el procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/MSV/JD08/OAX/179/2020¹⁴⁷; así como la diversa identificada como **INE/CG335/2022**, de nueve de mayo de dos mil veintidós, que resolvió el expediente UT/SCG/Q/VAZD/JD12/MEX/201/2020.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Consulta en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126885/CGex202202-04-rp-5-12.pdf>

¹⁴⁸ Consulta en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/134698/CGex202205-09-rp-1-74.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Aunado a que, dicha conclusión fue confirmada por la *Sala Superior* al dictar sentencia el uno de junio de dos mil veintidós, en el recurso de apelación **SUP-RAP-319/2022**, en lo que, interesa, conforme a lo siguiente:

“Al respecto, Morena se limitó a señalar que: *i)* algunas afiliaciones se realizaron debidamente durante las asambleas en diversas entidades para su constitución como partido político nacional; *ii)* otras no fueron realizadas por el actor, sino por los mismos ciudadanos, mediante un procedimiento abierto a través de cualquier medio; *iii)* a pesar de no contar con la documentación comprobatoria, los registros fueron realizados debidamente y en todo momento actuó de buena fe.

Lo **infundado** de lo alegado radica en que el partido político es el sujeto obligado a presentar la información y documentación relativa a la afiliación de sus militantes.

Ello puesto que es justamente el instituto político que realizó la afiliación quien se encuentra en aptitud de contar con diversas pruebas del registro conducente, en cada caso, partiendo de que se trata de documentación relacionada con otros deberes legales, como la observancia del porcentaje de integrantes para mantener su registro.

De igual forma, además de la constancia de inscripción, tenía la posibilidad de aportar otros medios de prueba como documentos que justificaran la participación voluntaria de los denunciantes en la vida interna del partido y con carácter de militantes.

Para lo anterior pudo haber aportado, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

Bajo esa lógica, la parte denunciante no estaba obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba no son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.

Asimismo, la parte actora estaba obligada a cumplir con el acuerdo INE/CG33/2019 por el que la autoridad responsable ordenó a los partidos políticos actualizar sus padrones de militantes, otorgándoles un plazo que concluyó el treinta y uno de enero de dos mil veinte.

Esto a fin de que los registros de militancia se integraran únicamente con aquellos casos en los que conste el soporte documental correspondiente a las personas que mantuvieran su afiliación vigente, así como aquellas que en realidad hubieran solicitado su afiliación.

Por consiguiente, Morena estaba obligado a revisar y depurar su padrón de militantes antes del treinta y uno de enero de dos mil veinte, con el objeto de tener registros de afiliación sustentados con sus respectivas cédulas, sin que lo hiciera.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

Lo anterior es así, ya que las trece personas denunciantes se encontraron en su padrón de militantes, respecto de las cuales ya no había justificación de que formaran parte de su listado de afiliados en términos de lo ordenado en el aludido acuerdo, sobre la base de que carecían de las constancias con las que así se acreditara.

Así, de la determinación cuestionada se aprecia que la responsable sustanció una investigación en la que comprobó que los ciudadanos fueron inscritos al partido político sin que el recurrente presentara la documentación que comprobara que hubieran otorgado su consentimiento.

Por ello, se considera que la resolución controvertida fue apegada a derecho, en tanto que Morena incumplió con su deber de probar que la afiliación de los denunciantes se hubiera realizado con su consentimiento, con independencia de que con posterioridad los hubiera dado de baja.”

Así, en estos casos la carga de la prueba corresponde a **MORENA**, en tanto que el dicho de las personas denunciantes consiste en afirmar que no dieron su consentimiento para ser afiliadas, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; en tanto que el partido político, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto apartados arriba, **la libertad de afiliación en materia político-electoral es un derecho reconocido y así garantizado para toda ciudadana y ciudadano de nuestro país**, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafilarse e, incluso, no pertenecer a ninguno.**

Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio IFE ahora INE en la resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos previsto como garantía constitucional, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento – para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliadas y afiliados- siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**, o –para el caso de la omisión de atender solicitudes de desafiliación- demostrar que dieron cauce legal a las solicitudes de desafiliación de manera pronta y oportuna y, que derivado de ello, ya no se encuentran en sus registros de militantes.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo una persona previa a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior, incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que en su defensa se deben presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Con base en todo lo expuesto, toda vez que las **catorce personas denunciantes** manifiestan no haber otorgado su consentimiento para ser agremiadas al partido; que está comprobada la afiliación de las personas, y que MORENA, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, **esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de las personas quejasas y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

En atención a lo precisado previamente, y ante la falta de documentación idónea que permita acreditar de manera la voluntad de las personas denunciantes para afiliarse al partido político denunciado, existe evidencia que hace suponer que las afiliaciones materia del presente procedimiento, fueron producto de una acción ilegal por parte de MORENA.

En efecto, como se demostró anteriormente, las personas denunciantes aparecieron afiliadas a MORENA, y manifestaron que en **ningún momento** otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la transgresión al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la *Constitución* y la ley, según se expuso.

Lo anterior pues el denunciado no demostró que las afiliaciones se realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichas personas hubieran dado su consentimiento para ser afiliadas, ni mucho menos que hubieran permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar la afiliación, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, y ante la negativa de las **catorce** personas denunciantes de haberse afiliado a MORENA, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de **pruebas idóneas**, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de las personas promoventes, lo que no hizo en el caso en concreto.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación a MORENA implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

podiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a las **catorce** personas quejas.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales tiene íntima vinculación con la afiliación indebida de las **catorce personas quejas** sobre las que se tiene por acreditada la infracción en el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente demostrado, y como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Por todo lo anterior, se tiene por **acreditada la infracción** imputada a MORENA derivado de la denuncia presentada por **las catorce personas quejas**, en consecuencia, deberá imponerse a dicho partido político una sanción que será determinada en el apartado correspondiente de la presente resolución.

Consideraciones similares sostuvo este *Consejo General* en las resoluciones **INE/CG335/2022**,¹⁴⁹ **INE/CG75/2022**¹⁵⁰ e **INE/CG1529/2021**,¹⁵¹ de nueve de mayo y cuatro de febrero de dos mil veintidós, así como del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, al resolver los procedimientos sancionadores ordinarios UT/SCG/Q/VAZD/JD12/MEX/201/2020, UT/SCG/Q/MSV/JD08/OAX/179/2020 y UT/SCG/Q/HGR/JD09/MEX/41/2021, respectivamente.

Cabe destacar que, la primera y última fueron confirmadas por *Sala Superior* mediante sentencias de uno de junio de dos mil veintidós y veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dictadas para resolver los recursos de apelación SUP-RAP-139/2022¹⁵² y SUP-RAP-427/2021.¹⁵³

APARTADO B. DOS PERSONAS SOBRE A QUIENES SE LES VULNERÓ EL DERECHO CIUDADANO A UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA LIBRE E INDIVIDUAL

C.	Persona
1	María de Lourdes Hernández García

¹⁴⁹ Consulta disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/134698/CGex202205-09-rp-1-74.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹⁵⁰ Consulta disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126885/CGex202202-04-rp-5-12.pdf>

¹⁵¹ Consulta disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125185/CGex202109-30-rp-1-12.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹⁵² Consulta disponible en: https://www.te.gob.mx/buscador/#_ftn1

¹⁵³ Consulta disponible en: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/RAP/427/SUP_2021_RAP_427-1098342.pdf

C.	Persona
2	María Teresa Hernández Segura

Previo al análisis detallado de la infracción aducida por las personas quejasas, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar la responsabilidad, así como la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

Dicho lo anterior, a continuación, se debe dilucidar si dichas acreditaciones fueron o no voluntarias, pues en este segundo caso, se actualizará la infracción denunciada, y en consecuencia, será procedente imponer una sanción de entre las que establece el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIE*.

Así, como vimos, en el apartado 5. *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado que **las personas denunciantes** fueron registradas por MORENA como representantes ante mesa directiva de casilla para el Proceso Electoral 2020-2021; y que el partido político, no aportó documento alguno en el que se consignara la voluntad de estas para representar sus intereses el día de la jornada electoral.

Asimismo, de lo informado por los órganos del *INE*, se advierte que después de realizar la revisión de las Actas de Jornada Electoral y Actas de Escrutinio y Cómputo, en la sección y casilla que correspondan en las que fueron acreditadas para el Proceso Electoral 2020-2021 no se localizó constancia alguna de la presencia de **María de Lourdes Hernández García y María Teresa Hernández Segura** durante la jornada electoral para la que fueron acreditadas.

Lo anterior, guarda relación con lo manifestado por las denunciantes en su respectivo escrito de queja referente a que no han participado como representantes de **MORENA**, teniendo conocimiento de ello en el momento de participar como aspirante al cargo de supervisora/capacitadora-asistente electoral para el proceso de revocación de mandato 2022.

Motivo por el cual, era evidente que las denunciantes no acudirían el día de la jornada electoral a desempeñar una representación partidaria de la cual no tenían conocimiento y de la que aducen, no haber otorgado su consentimiento para ser acreditadas con tal carácter.

Expuesto lo anterior, debe precisarse que la carga de la prueba para demostrar que la acreditación de **María de Lourdes Hernández García y María Teresa Hernández Segura** como representantes ante mesa directiva de casilla fue resultado de una manifestación de voluntad libre e individual, corresponde al partido político denunciado, y no a las denunciantes acreditar que no otorgaron su consentimiento para tales nombramientos, al tratarse de un hecho negativo que no es objeto de prueba.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho que refiere "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGPE*.

Bajo dicho principio, a quien niega se le releva de la carga de probar, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Sentado lo anterior, es importante precisar que **MORENA al dar contestación al emplazamiento, a la vista de alegatos, no proporcionó información relacionada con los registros; de igual forma, en los requerimientos de información que se le formularon, se limitó a solicitar prórroga para dar respuesta.**

Es importante destacar que el *Tribunal Electoral*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹⁵⁴ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹⁵⁵ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹⁵⁶ y como estándar probatorio.¹⁵⁷

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

¹⁵⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹⁵⁵ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

¹⁵⁶ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

¹⁵⁷ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁵⁸ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis (haciendo los cambios necesarios), en la materia sancionadora electoral, el *Tribunal Electoral* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, en el caso, la acusación implica dos elementos:

- **Que existió una acreditación como representante ante mesa directiva de casilla o general.**
- **Que no medió la voluntad de la persona denunciante para fungir con dicho cargo.**

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LGPE*, lo que implica, que la persona denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue acreditada como representante ante mesa directiva de casilla por el partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona fue acreditada bajo su consentimiento, es el

¹⁵⁸ Véanse las tesis *PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA*, así como *DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO*.

nombramiento debidamente firmado por la persona denunciante; así como las actas de jornada y de escrutinio y cómputo que permitan obtener elementos de convicción respecto de que las personas consintieron dicha acreditación al acudir a representar a dicho instituto político.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador se alega que no dieron su consentimiento para fungir como representantes ante mesa directiva de casilla o general, respectivamente, la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad), pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la acreditación estuvo precedida de la manifestación de voluntad de las personas, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que dichas acreditaciones fueron voluntarias, debiendo acompañar, pruebas idóneas y suficientes, si desea evitar alguna responsabilidad.

En ese sentido si el partido denunciado alega que las acreditaciones se llevaron a cabo previo consentimiento de las personas denunciantes, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar la documentación atinente, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación, pues de conformidad con la normativa aplicable, se encuentra obligado a proteger los datos personales que tiene bajo su custodia, así como, en su caso, acreditar que para su utilización se otorgó un consentimiento previo por parte de su titular.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

En este tenor, **MORENA** omitió proporcionar información y/o documentación en respuesta a los requerimientos que le fueron formulados, previo al emplazamiento, limitándose a solicitar prórroga para dar respuesta. Asimismo, el partido político denunciado al dar contestación al emplazamiento y a la vista para formular alegatos en el presente procedimiento administrativo sancionador, omitió pronunciarse al respecto, así como aportar medios de prueba a fin de acreditar la legalidad de los registros materia de denuncia.

Como ya se ha precisado en el marco normativo de la presente resolución, el artículo 259, párrafo 1, de la *LGPE*, prevé el derecho de los partidos políticos a nombrar dos representantes propietarios y un suplente ante cada mesa directiva de casilla, así como representantes generales propietarios.

A su vez, el artículo 259, párrafo 3 de la misma ley, refiere que los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla, así como los representantes generales podrán firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla.

El artículo 262 de la multicitada ley señala que el nombramiento de los representantes ante mesas directivas de casilla y de los representantes generales se hará ante el consejo distrital correspondiente, sujetándose a diversas reglas, entre ellas: a) Los partidos políticos deberán registrar en su propia documentación y ante el consejo distrital correspondiente a los representantes generales y de casilla, bajo los requisitos que establezca el *Consejo General*; b) Los consejos distritales devolverán a los partidos políticos el original de los nombramientos respectivos, debidamente sellados y firmados por el presidente y el secretario del mismo, conservando un ejemplar; c) Los partidos políticos podrán sustituir a sus representantes hasta con diez días de anterioridad a la fecha de la elección, devolviendo con el nuevo nombramiento, el original del anterior.

De lo anterior, en suma, se advierte que el “NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATO INDEPENDIENTE ANTE MESA DIRECTIVA DE CASILLA”, es un documento que contiene la designación del cargo, donde se reserva un apartado para el nombre y firma del representante acreditado con la finalidad de hacer patente la manifestación de su consentimiento; en el que intencionalmente se previó un espacio para estampar la respectiva rúbrica.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

En ese sentido, el sistema para el registro de representantes de partido político ante mesa directiva de casilla prevé un mecanismo que sirve de autenticidad de la voluntad para aceptar el nombramiento, como lo es el formato que suscribe el representante que lo acredita como tal y a partir del cual, se registra ante la autoridad administrativa electoral.

Ahora bien, no escapa de la atención de esta autoridad que en el diverso artículo 259, numeral 3, de la *LGIPE*, se indica textualmente que los representantes “podrán” firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla; no obstante, esta consideración normativa debe interpretarse en relación a la temporalidad a la que se alude en el mismo precepto; es decir, de permitirse otorgar el consentimiento a través de la rúbrica hasta antes del inicio de la jornada comicial; y no como una potestad de firmar o no el nombramiento conducente por parte de los representantes.

En virtud de lo anterior, si bien no existe obligación de los partidos políticos de recabar la firma del representante de casilla al momento de cargar el formato en el sistema de registro, pues si bien es cierto que pueden ser suscritos hasta antes de acreditarse en la casilla, lo cierto es que ello atiende a cuestiones administrativas del sistema y no a la obligación que tienen los entes políticos de contar con el consentimiento de los ciudadanos para ser nombrados como sus representantes y estar en aptitud de ser facultados con este carácter ante la autoridad administrativa electoral y frente a la ciudadanía en general.

Así, al preverse dentro de los requisitos de los nombramientos, el nombre y la firma a favor de quien expide el documento se deduce que la legalidad del instrumento se condiciona a la voluntad del que suscribe o de quién formula su consentimiento para ser acreditada con ese carácter.

Bajo esta lógica, en el presente caso, al no existir documento alguno que haga patente la voluntad de **María de Lourdes Hernández García y María Teresa Hernández Segura** para ser registradas como representante de casilla de **MORENA**, se confirma el indebido actuar del partido denunciado al nombrarla sin su consentimiento.

Al respecto, resulta necesario citar algunas consideraciones sustentadas por la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el SUP-RAP-123/2019, respecto al ejercicio del derecho constitucional y legal de los partidos políticos a nombrar a quienes lo representen en un distrito electoral.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

“...el ejercicio de participación política que llevan a cabo los representantes de partidos ante la casilla se dirige a coadyuvar por el resguardo de los intereses del instituto político que los nombra, con el objetivo esencial de que la elección se lleve a cabo con estricto apego a los principios constitucionales y bases legales que cualquiera de los comicios debe revestir.

En esta tesitura, los representantes aludidos desde la ubicación de la casilla para las que fueron acreditados deben, entre otras obligaciones y facultades, presenciar la jornada electoral observando y vigilando el desarrollo de ésta en cada una de sus etapas, las actividades de los funcionarios del centro de votación, el manejo de la documentación electoral y el comportamiento tanto de los demás ciudadanos acreditados en ésta, como del resto de sufragantes.

Lo anterior cobra importancia en la medida en la cual, el ciudadano que actúa como representante, lleva a cabo todas esas actividades con la plena consciencia cívica de que su asistencia al evento comicial obedece a la coincidencia y compatibilidad ideológica que detenta el partido, o en su caso, con la inclinación a la propuesta política que representa; razón por la cual, el elemento esencial, absoluto y vinculante que se requiere para fungir con este carácter es la voluntad de apoyar y actuar en nombre de la fuerza política con la que se simpatiza electoralmente o se concuerda ideológicamente.

Por otro lado, desde el punto de vista normativo, se tiene que en el artículo 264 de la LGIPE, se observan los datos que los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla deben contener, entre ellos, el número de distrito electoral, sección y casilla en que actuarán, clave de credencial para votar, lugar y fecha de expedición y firma del representante o del dirigente que haga el nombramiento.

Así mismo, el arábigo 259, numeral 3, del mismo ordenamiento, señala, en lo que interesa, que los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla podrán firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en ésta...

(...)

En ese sentido, se colige que en el sistema para el registro de representantes de partido político ante casilla, se prevé el mecanismo que sirve de autenticidad de la voluntad para aceptar el nombramiento, como lo es el formato que suscribe el representante que lo acredita como tal y a partir del cual, se registra ante la autoridad administrativa electoral.

Ahora bien, no escapa de la atención de este máximo órgano jurisdiccional que en el diverso precepto 259, numeral 3, de la LGIPE, se indica gramaticalmente que los representantes “podrán” firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla; no obstante, esta consideración normativa debe interpretarse en relación a la temporalidad a la que se alude en el mismo precepto; es decir, de permitirse otorgar el consentimiento a través de la rúbrica hasta antes del inicio de la jornada comicial; y no como una potestad de firmar o no el nombramiento conducente por parte de los representante.”

Asimismo, y como se precisó previamente, de la revisión efectuada a las Actas de Jornada Electoral y Actas de Escrutinio y Cómputo que obran en autos, no se localizó constancia alguna de la presencia de **María de Lourdes Hernández García y María Teresa Hernández Segura** como representantes ante mesa directiva de casilla durante la jornada electoral, es decir, tampoco se desprende que las ciudadanas en cuestión se presentaran ese día a representar los intereses del instituto político denunciado.

Máxime que, éste no justificó, ni aportó elementos probatorios que permitieran a esta autoridad electoral suponer que la acreditación de **María de Lourdes Hernández García y María Teresa Hernández Segura** como representantes ante mesa directiva de casilla, se llevó a conforme a derecho, derivado de un consentimiento, libre y voluntario para fungir como representante de **MORENA** para el Proceso Electoral 2020-2021, proporcionando sus datos personales para dicha finalidad y que, por ende, ejerciera de forma debida el derecho de nombrar a quienes lo representen ante las mesas directivas de casilla.

Por lo que, en el caso, debe señalarse que el debido ejercicio del derecho de los partidos políticos de nombrar a quienes los representen ante mesa directiva de casilla o a sus representantes generales, permite el adecuado encausamiento, evitando así invasiones o trasgresiones en la vigencia de otros derechos; pues de forma contraria, atentaría contra la esencia misma del Derecho y de la Justicia.

En ese sentido, esta autoridad electoral considera que **existe un indebido ejercicio del derecho constitucional y legal de nombrar a quienes lo representen en un distrito electoral e, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción.

De los hechos que han quedado debidamente acreditados en la presente resolución, se desprende que el partido político denunciado transgredió el derecho de **María de Lourdes Hernández García y María Teresa Hernández Segura** a participar de manera libre e individual en los asuntos políticos del país, toda vez que al acreditarlas como sus representantes de casilla, sin que hubieren otorgado su consentimiento para ello, se les pudo asociar y vincular indebidamente con sus postulados e ideología al registrarlas para defender sus intereses en el marco de unos comicios electorales.

En efecto, como ya se precisó en el apartado relativo al marco normativo, la participación política libre e individual, implica tanto el derecho de asociación o de afiliación a un partido político, como el derecho a no ser vinculado o relacionado con éstos sin que exista un consentimiento expreso por parte de su titular, pues esa libertad de participar en los asuntos políticos del país trae consigo el derecho de la ciudadanía a no ser relacionado como simpatizante o militante para representar los intereses de un determinado partido político.

En el caso, la acreditación de las **dos personas denunciantes** como representantes del partido político denunciado ante mesa directiva de casilla, sin que se encuentre acreditado que otorgaran su consentimiento para que sus datos personales fueran utilizados para tales efectos, implica una transgresión constitucional, específicamente de los artículos 1, 6 y 35, en los que se reconoce la titularidad de los derechos humanos en beneficio de todas las personas, la libertad de asociarse individual y libremente, así como la protección a la vida privada y datos personales.

Por tanto, toda vez que el partido político denunciado utilizó el nombre y datos personales de estas **dos personas** para acreditarla como representantes ante mesa directiva de casilla, éste violó principios constitucionales, pues como ya se razonó, constituye un derecho ciudadano el no ser vinculado o relacionado con un partido político y sus intereses o fines.

Lo anterior es así, en tanto que la acreditación como representante de un partido político ante algún órgano electoral, cualquiera que este sea, trae consigo, de forma implícita, la afirmación de que la persona comparte la ideología política de dicho partido político o al menos simpatiza con esta, lo que puede afectar su imagen, honra y reputación, pues la sola acreditación, en tanto hecho público, implica la representación de los intereses del partido político en cuestión, lo cual, como ya se ha razonado, de no existir la voluntad manifiesta, se traduce en una transgresión constitucional y a diversos instrumentos internacionales, los cuales han sido debidamente citados en el apartado correspondiente de esta resolución.

En consecuencia, toda vez que **MORENA** no acreditó que **María de Lourdes Hernández García y María Teresa Hernández Segura** hubieran dado su consentimiento para ser acreditadas como su representante ante mesa directiva de casilla, transgredieron sus derechos de la ciudadanía a no ser vinculadas o relacionadas con algún partido político, lo que se traduce en una transgresión a lo establecido en los artículos 1, 6, primer párrafo, y 35, fracción III, de la *Constitución*, en relación con los diversos 23, párrafo 1, inciso a) y 25, párrafo 1, inciso a), de la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

LGPP al inobservar los límites impuestos en dichos preceptos constitucionales y legales y acreditarlo públicamente para representar sus intereses en el marco de un proceso electoral.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la acreditación como representante ante mesa directiva de casilla por parte de un partido político, en el caso MORENA implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político denunciado para registrar como sus representantes a **María de Lourdes Hernández García y María Teresa Hernández Segura**.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales tiene íntima vinculación con la acreditación como representantes ante mesa directiva de casilla por parte de MORENA de **María de Lourdes Hernández García y María Teresa Hernández Segura**, sobre quienes se tiene por acreditada la infracción en el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente demostrado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de la sanción que se determinarán en el apartado correspondiente.

A similar conclusión arribó este *Consejo General* al emitir las resoluciones INE/CG353/2019 e INE/CG414/2019 de catorce de agosto y dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, al resolver los procedimientos ordinarios sancionadores identificados con la clave UT/SCG/Q/ABGF/JD07/SON/131/2018 y UT/SCG/Q/HML/CG/69/2019, respectivamente. Las cuales fueron confirmadas por la *Sala Superior* al dictar sentencia el once de septiembre y nueve de octubre de dos mil diecinueve, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-123/2019¹⁵⁹ y SUP-RAP-140/2019,¹⁶⁰ respectivamente.

Asimismo, en la resolución INE/CG495/2020,¹⁶¹ dictada por el *Consejo General* el veinte de octubre de dos mil veinte, al resolver el procedimiento sancionador ordinario con clave de expediente UT/SCG/Q/ARGF/JD03/SON/27/2020; y de igual

¹⁵⁹ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0123-2019.pdf

¹⁶⁰ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0140-2018.pdf

¹⁶¹ Consultable en la página de internet: [CGex202010-07-rp-1-184.pdf \(ine.mx\)](https://www.ine.mx/CGex202010-07-rp-1-184.pdf)

manera, en la resolución INE/CG1667/2021¹⁶² en la que resolvió el diverso UT/SCG/Q/MEGR/JD08/CDM/81/2021 del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.

SÉPTIMO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte de MORENA, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

6.1. Afiliación indebida

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
MORENA	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , del <i>COFIPE</i> , la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la transgresión al derecho de libre afiliación (modalidad positiva) y el uso indebido de los datos personales de 14 personas por parte de MORENA.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en los diversos 443, párrafo 1, inciso a), y n) de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y y) de la <i>LGPP</i> .

¹⁶² Consultable en la página de internet <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125801/CGor202111-17-rp-3-32.pdf>

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de las y los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que MORENA **afilió indebidamente** en su padrón de militantes a **catorce** personas, respecto de las que se acreditó la infracción, sin demostrar que para incorporarlas medió la voluntad de éstas de inscribirse como militantes de dicho instituto político, transgrediendo con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la transgresión al derecho de libre afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de las personas promoventes sin que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

Esto es, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la infracción acreditada, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de las personas quejas al padrón de militantes del partido político denunciado.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente a MORENA.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

La falta es **singular**, por lo siguiente:

Aun cuando se acreditó que MORENA transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de más de una persona, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al instituto político denunciado, quien incluyó en su padrón de militantes a las hoy partes actoras, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

Cabe precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse juntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles a MORENA, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*, en su aspecto positivo, al incluir en su padrón de afiliados a **catorce personas**, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstas de pertenecer en las filas del instituto político en el cual se encontraron incluidas, tal y como se advirtió a lo largo de la presente resolución de forma pormenorizada.

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, las afiliaciones indebidas acontecieron en diversos momentos, mismos que se resumen en la tabla siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

N°	Nombre de la persona quejosa	Fecha de afiliación
1	Axel Martínez Betanzos	23/02/2013
2	Mitzi Ortiz Rodríguez	20/04/2013
3	Israel Ávila Salgado	20/10/2014
4	Diana Ángeles Lara Trujillo	15/11/2017
5	Rosa María Herrera Ledezma	15/08/2016
6	Yesica Gutiérrez Gutiérrez	27/10/2017
7	Dalia Karina Hernández Higareda	08/12/2013
8	Lourdes Elizalde Juárez	03/09/2015
9	Insdy Suárez Bautista	02/01/2015
10	Blanca Esmeralda Hernández Escobar	19/08/2015
11	Princesa Jara Quiroz Reyes	26/05/2016
12	Ernesto Ariza Becerra	01/03/2013
13	Yessenia Valdez Jiménez	16/01/2016
14	Lucia Viridiana Guerrero Martínez	09/04/2014

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en el escrito de denuncia, se deduce que las faltas atribuidas a MORENA se cometieron en diversos estados de la República Mexicana, conforme a lo siguiente:

N°	Nombre de la persona quejosa	Entidad
1	Axel Martínez Betanzos	Ciudad de México
2	Mitzi Ortiz Rodríguez	México
3	Israel Ávila Salgado	México
4	Diana Ángeles Lara Trujillo	México
5	Rosa María Herrera Ledezma	Ciudad de México
6	Yesica Gutiérrez Gutiérrez	México
7	Dalia Karina Hernández Higareda	Querétaro
8	Lourdes Elizalde Juárez	México
9	Insdy Suárez Bautista	México
10	Blanca Esmeralda Hernández Escobar	México
11	Princesa Jara Quiroz Reyes	México
12	Ernesto Ariza Becerra	Morelos
13	Yessenia Valdez Jiménez	México
14	Lucia Viridiana Guerrero Martínez	México

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en **el caso existe una conducta dolosa** por parte de **MORENA**, en transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*, replicados en los dispositivos 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y y) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

- MORENA es un partido político nacional, y por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- MORENA está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*, replicado en el diverso 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadana y ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** o desafiliación y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos

de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del *COFIPE*; disposiciones contenidas en los diversos 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.

- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una transgresión de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**
- MORENA tenía conocimiento de los alcances y obligaciones que se establecieron a los partidos políticos en el acuerdo **INE/CG33/2019**, y sobre la necesidad de depurar sus padrones de militantes a fin de que estos fuesen confiables y se encontraran amparados por los documentos que demostraran la libre voluntad de sus agremiados de pertenecer a sus filas. Asimismo, conocía a cabalidad las etapas en que se dividió el acuerdo y las cargas y obligaciones que debía observar en todo su desarrollo.

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

1) Las personas quejasas aluden que no solicitaron voluntariamente, en momento alguno, su registro o incorporación como militantes a MORENA; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.

2) Quedó acreditado que las partes denunciantes aparecieron en el padrón de militantes de MORENA, conforme a lo informado por la *DEPPP*, quien además precisó que dicha información deriva del padrón de militantes capturado por ese instituto político.

3) El partido político denunciado no aportó pruebas o, bien, no exhibió pruebas idóneas, con las que demostrara que las afiliaciones de las partes quejasas se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de las personas denunciantes.

4) El partido denunciado no demostró ni probó que las afiliaciones de las personas quejasas fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que las afiliaciones fueron debidas y apegadas a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

5) El registro de afiliación de las personas denunciantes se efectuó con fecha anterior al veintitrés de enero de dos mil diecinueve en la que se aprobó el acuerdo **INE/CG33/2019**.

6) La cancelación del registro de afiliación de éstas ocurrió fuera de los plazos establecidos en el acuerdo **INE/CG33/2019**.

Sobre estos dos últimos puntos, debe tenerse presente que en términos de las previsiones establecidas en el acuerdo **INE/CG33/2019**, los partidos políticos tenían la obligación de llevar a cabo la revisión de sus padrones, en el entendido de que, de no contar con la documentación soporte, debían reservar dichas afiliaciones a fin de intentar conseguir el refrendo o ratificación por parte del militante.

Bajo esa lógica y de conformidad con las razones que motivaron la instrumentación del citado acuerdo, todas aquellas afiliaciones obtenidas por los partidos políticos con fecha posterior al veintitrés de enero de dos mil diecinueve, es decir, aquellas consideradas nuevas, debían, indefectiblemente, contar con

los documentos comprobatorios de la libre voluntad de afiliación, ya que la facultad de reservar el registro, solo estaba previsto para los casos derivados del padrón existente a la fecha de emisión del acuerdo; sin embargo, como ya se mencionó, en el caso que nos ocupa, el partido no reservó la afiliación de las personas quejasas, ni mucho menos acompañó la documentación comprobatoria.

De ahí que esta circunstancia sea relevante para la presente individualización, habida cuenta que esa omisión pone de manifiesto el actuar indebido del denunciado, aún y cuando tenía conocimiento de la obligación contraída, primero de contar con la documentación soporte de la libre voluntad de las partes denunciantes de ser su militantes, de conformidad con la obligación constitucional y legal que se le impone, y luego, derivado del conocimiento que tuvo sobre los alcances de la suscripción del acuerdo INE/CG33/2019, y de la necesidad y compromiso de regularizar su padrón de personas afiliadas, en los términos impuestos en este acuerdo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por MORENA se cometió **al afiliar indebidamente a catorce personas**, sin demostrar al acto volitivo de éstas de ingresar en su padrón de militantes, como de que hayan proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de la ciudadanía mexicana y que la conducta se acredita ante la ausencia de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de las partes denunciantes de militar en MORENA.

Además, como se indicó, si bien la afiliación de las partes denunciantes aconteció anterior al Acuerdo **INE/CG33/2019**; lo cierto es que, a partir de la emisión de dicha determinación el denunciado, **ya tenía la obligación de contar con la documentación que justificara la incorporación de las personas a su padrón de afiliados, o en su caso, eliminarlos del mismo**; sin embargo, en el caso que nos ocupa, no acompañó dicha documentación comprobatoria a ninguna de sus intervenciones procesales, circunstancia relevante para el caso que nos ocupa, que será tomada en consideración al momento de seleccionar la sanción aplicable al caso concreto.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido político, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, el *Tribunal Electoral* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme**.

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN**.¹⁶³

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a

¹⁶³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, por cuanto hace a MORENA, esta autoridad tiene presente la existencia de diversas resoluciones emitidas por el *Consejo General*, sobre conductas idénticas a la que nos ocupa, destacándose para los efectos del presente apartado, la identificada con la **INE/CG529/2018**, del **veinte de junio de dos mil dieciocho**, misma que no fue impugnada y, por tanto, es definitiva y firme.

Con base en ello, y tomando en consideración que las afiliaciones indebidas por las que se demostró la infracción en el presente procedimiento fueron realizadas con anterioridad al dictado de la referida resolución, se estima que en el caso **no existe reincidencia**.

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de las **catorce** personas quejas a MORENA, pues se comprobó que éste las afilió, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de sus agremiados de pertenecer a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militantes de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de las partes denunciadas, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados de MORENA.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún proceso electoral.
- No existe reincidencia por parte de MORENA.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió MORENA como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de las personas quejas, lo que constituye una transgresión a su derecho fundamental de libre afiliación reconocido en la *Constitución*.

C) Sanción a imponer

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de graves y reiteradas conductas transgresoras a la *Constitución* y la *LGIPE*, la cancelación de su registro como partido político.

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE* establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar en cuenta, entre otras cuestiones, la gravedad de la conducta; la necesidad de suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial.

Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz también de lo establecido en los artículos 22 de la *Constitución*, el cual previene que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado; y con el criterio sostenido por la *Sala Superior* a través de la Tesis **XLVI/2002**, de rubro **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**, conduce a estimar que si bien este *Consejo General* no puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, **éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en torno al *quántum* (cantidad) de la sanción que corresponda a una infracción e infractor en particular.**

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este *Consejo General*, como órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la *pena* a que se refiere el artículo 22 constitucional, entendida como expresión del *ius puniendi* que asiste al estado) **está compelido a ponderar, casuísticamente, todas las circunstancias relevantes que converjan en un caso determinado**, partiendo del mínimo establecido en el artículo 458 de la *LGIPE*, que como antes quedó dicho, constituye la base insoslayable para individualizar una sanción.

Esto es, el *INE*, en estricto acatamiento del principio de legalidad, **está obligado** al análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la *LGIPE*, en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a soslayar el vocablo “entre otras”, inserta en artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, y la tesis antes señalada y consecuentemente, a no administrar una justicia **completa**, contrariamente a lo previsto por la Norma Fundamental.

Lo anterior es relevante porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería intocado.

En ese tenor, este *Consejo General* ha estimado en diversas ocasiones que por la infracción al derecho de libertad de afiliación como el que ha quedado demostrado a cargo de MORENA, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada ciudadana y ciudadano sobre quienes se cometió la falta acreditada**.

Otro elemento a considerar para la imposición de la sanción es el relativo a que, como se refirió en el Considerando denominado “**Efectos del acuerdo del Consejo General INE/CG33/2019**” tanto esta máxima autoridad electoral administrativa como los propios partidos políticos, entre ellos MORENA, advirtieron que a la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

transgresión del derecho de libertad de afiliación que dio lugar a los precedentes a que se refiere el párrafo anterior, subyacía un problema de mayor extensión, reconociendo la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.

Ante tales circunstancias, y de conformidad con las previsiones establecidas en el citado Acuerdo, se implementó un procedimiento extraordinario de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar, en un breve periodo, que solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de quienes, además, los institutos políticos cuenten con el soporte documental atinente a la militancia.

Lo anterior, obedece justamente a la vigencia del orden jurídico, incluso más allá de la imposición de sanciones que reprochen a los partidos políticos la transgresión al derecho fundamental de la ciudadanía a decidir si desean o no militar en una fuerza política, además de fortalecer al sistema de partidos, el cual se erige indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país, permitiendo que los institutos políticos cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y debidamente soportado, en cumplimiento al principio de certeza electoral.

Por estas razones, en dicha determinación, se establecieron plazos específicos para que los partidos políticos cumplieran su obligación de tener padrones de militantes debidamente integrados.

Siendo que en la etapa de Consolidación de Padrones se establecieron las siguientes obligaciones:

Los PPN realizarán los ajustes finales a los padrones, con la finalidad de que solamente contengan los nombres de las personas respecto de las cuales se cuente con el documento que avale la afiliación o ratificación de la misma, así como la identidad de los mismos, con los publicados en la página de Internet del INE. Esta etapa deberá concluirse a más tardar el **treinta y uno de enero de dos mil veinte**.

Destacándose que en términos del acuerdo **INE/CG33/2019**, esta etapa ratificación concluiría a más tardar al **treinta y uno de enero de dos mil veinte**.

Además, es de suma importancia destacar que el citado Acuerdo, implicó para todos los partidos políticos nacionales, aparte de la baja de las personas quejasas de sus padrones de afiliados, una serie de cargas y obligaciones de carácter general,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

tendientes a depurar sus listados de militantes y, a la par, inhibir los registros de afiliaciones que no encuentren respaldo documental sobre la plena voluntad y consentimiento de cada ciudadana y ciudadano.

En sintonía con lo expuesto, en ese acuerdo se estableció que la realización de las obligaciones a cargo de los partidos políticos podría tomarse en cuenta como atenuante al momento de individualizar la sanción correspondiente, de resultar acreditada la infracción en los respectivos procedimientos sancionadores y de acuerdo con la valoración y circunstancias particulares de cada expediente.

No obstante, en el caso concreto, es importante tomar en cuenta que existen circunstancias particulares a través de las cuales **se acreditó la infracción** materia del presente procedimiento sancionador ordinario incoado en contra de **MORENA**, aún a sabiendas del contenido, alcances y consecuencias de la emisión del acuerdo **INE/CG33/2019** de veintitrés de enero de dos mil diecinueve; tal como se advierte de lo precisado en el **numeral 5** del Considerando **QUINTO de esta resolución**.

Ello, evidentemente denota una conducta dolosa por parte del denunciado, de infringir el acuerdo adoptado al que se refieren los párrafos precedentes, en contravención a la razón que subyacía a su aprobación, que es precisamente contar con padrones de militantes que dotaran de certeza a la autoridad electoral y a la ciudadanía en general sobre la integración de sus registros de agremiados, en beneficio del derecho de libre afiliación que deben observar todos los institutos políticos.

Por ello, esta autoridad considera que previo a determinar la sanción que corresponde a MORENA por la comisión de la infracción que ha sido materia de estudio en la presente Resolución, es por demás trascendente valorar también las circunstancias particulares del caso, con el objeto de acatar cabalmente el mandato constitucional de administrar justicia de manera completa, inserto en el artículo 17 de la *Constitución*.

En efecto, como antes quedó dicho, al aplicar una norma jurídica abstracta a un caso concreto, el juzgador está obligado a considerar todas las circunstancias que concurren en el particular, inclusive la conducta observada por el responsable con posterioridad a la comisión del ilícito, respecto a lo cual, resulta orientadora la jurisprudencia que se cita enseguida:

**“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CORRESPONDE AL ARBITRIO JUDICIAL DEL
ÓRGANO JURISDICCIONAL DE INSTANCIA Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL**

COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SUSTITUIRSE EN LA AUTORIDAD RESPONSABLE.¹⁶⁴ Acorde con el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad judicial es la encargada de imponer las penas, al ser la que valora las pruebas para acreditar el delito y la responsabilidad penal del acusado, quien mediante el ejercicio de la intermediación debe analizar los elementos descritos en los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que se refieren a las condiciones de realización del delito, las calidades de los sujetos activo y pasivo, la forma de intervención del sentenciado, la situación socioeconómica y cultural de éste, **su comportamiento posterior al evento delictivo**, así como las circunstancias en que se encontraba en su realización; **todas esas condiciones deben percibirse por el juzgador de instancia, al ser quien tiene contacto directo con el desarrollo del proceso penal** y no por el tribunal constitucional, el cual tiene como función salvaguardar derechos humanos y no verificar cuestiones de legalidad, en virtud de que su marco normativo para el ejercicio de sus facultades lo constituyen la Carta Magna, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito no debe sustituirse en la autoridad responsable, toda vez que no podría aplicar directamente los preceptos de la codificación penal indicada al no ser una tercera instancia, máxime que el tema del grado de culpabilidad del sentenciado y el cuántum de las penas no implica que la responsable se hubiese apartado de la razón y la sana lógica, no es una infracción a la interpretación de la ley, no es una omisión de valoración de la prueba y no consiste en la apreciación errónea de los hechos.”

Del modo anterior, este *Consejo General* considera que **la actitud adoptada por MORENA, no puede excluirlo de la responsabilidad en que incurrió**, y por el contrario, su actitud en cuanto a este procedimiento debe ser agravado, permitiendo modificar el criterio de sanción que se había venido sosteniendo, hacia un nivel superior de las sanciones previstas por la *LGPE*, toda vez que dicha actitud redundante en la vigencia del orden jurídico, en la protección al derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos tutelada, incluso, por parte de las propias entidades de interés público, como lo es el sujeto denunciado y la prevalencia del Estado de Derecho.

Lo anterior se considera así, ya que, como se indicó, la baja de las personas denunciadas del padrón de militantes del partido denunciado aconteció **con posterioridad a la vigencia del acuerdo INE/CG33/2019, temporalidad en la que no le es aplicable** los beneficios del referido acuerdo al establecer el mismo, esencialmente, un procedimiento de depuración de padrones de militantes, siendo que, en ese momento ya había concluido la etapa de **Consolidación de padrones**,¹⁶⁵ en donde se debió dar de baja del padrón de militantes a todas

¹⁶⁴

Consultable

en

la

página

<https://sif.scjn.gob.mx/sifsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2014661&Clase=DetalleTesisBL>

¹⁶⁵ Etapa que concluyó el treinta y uno de enero de dos mil veinte.

aquellas personas de las que no se tuviera la cédula de afiliación y no se contara con la voluntad de los interesados de permanecer en los partidos políticos.

Esto es, no obstante que, en esa temporalidad MORENA tenía pleno conocimiento de las razones y motivos que dieron sustento al acuerdo **INE/CG33/2019**, cuyo propósito central era que los partidos políticos realizaran una depuración de sus padrones de militantes, con el objeto de contar, **únicamente, con registros de afiliación sustentados con cédulas de afiliación**, en el modo tradicional o, en su caso, con el correspondiente registro electrónico, tratándose de la aplicación móvil, **lo cierto es que dicho instituto político realizó la baja hasta ser requerido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, sin que se aprecie que se hubiere realizado una genuina revisión de los registros de militantes por dicho partido político.**

Lo que denota, como se precisó previamente, un actuar indebido por parte de **MORENA** que evidentemente contraviene los fines y objetivos que debe observar una entidad de interés público, como lo son los partidos políticos, quienes, en términos de los artículos 41, de la *Constitución* y 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*, deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales, respetando, entre otros, los derechos de las y los ciudadanos.

Por lo anterior, no obstante, lo establecido en el Acuerdo **INE/CG33/2019** y los cumplimientos dados a dicho Acuerdo por parte de MORENA, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto, este *Consejo General* considera necesario transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE*, no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 21 Constitucional, que prevé que la imposición de las penas, su modificación y su duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, a juicio de este órgano

electoral derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida a MORENA **se justifica** la imposición de la sanción prevista en el artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

Bajo esta óptica, es que se toma en consideración que la acreditación de la afiliación indebida de las personas denunciadas, estuvo rodeada de circunstancias particulares, como lo fue el hecho de que el partido denunciado las siguiera conservando dentro de su padrón de militantes no obstante de haber transcurrido el periodo establecido para su depuración de registros de aquellas personas de las que no se tuviera cédula de afiliación, esto es con posterioridad al treinta y uno de enero de dos mil veinte; que la falta fue calificada como grave ordinaria; que se concluyó la existencia del dolo, y que **el partido ya sabía de su obligación de depurar sus padrones existentes y contar con la manifestación previa y documentada de su libre intención de ser militantes.**

Por ello, esta autoridad considera adecuado, en el caso concreto, imponer una multa a MORENA de conformidad con lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

- **963** (novecientos sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización¹⁶⁶ o, **963** (novecientos sesenta y tres) días de salario mínimo general para el Distrito Federal,¹⁶⁷ vigente en el año de la conducta, según corresponda, **por la infracción acreditada.**

Cabe precisar que, iguales sanciones han sido impuestas por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones, y que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, entre ellas, las identificadas con las claves **INE/CG483/2021**¹⁶⁸ e **INE/CG1529/2021**,¹⁶⁹ confirmadas a través de las sentencias dictadas en los expedientes **SUP-RAP-143/2021**¹⁷⁰ y **SUP-RAP-427/2021**¹⁷¹, respectivamente.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa y las condiciones socioeconómicas del instituto político denunciado, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la

¹⁶⁶ En lo sucesivo *UMA*.

¹⁶⁷ En lo subsecuente *SMGVDF*.

¹⁶⁸ Consulta disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120410/CGor202105-26-rp-10-4.pdf>

¹⁶⁹ Consulta disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125185/CGex202109-30-rp-1-12.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹⁷⁰ Consulta disponible en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0143-2021.pdf

¹⁷¹ Consulta disponible en: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/RAP/427/SUP_2021_RAP_427-1098342.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,¹⁷² emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”

Así, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una **multa** equivalente a **963** (novecientos sesenta y tres) **días de salario mínimo general para el Distrito Federal**,¹⁷³ al momento de la comisión de la conducta, **por cada una de personas que se considera fueron afiliadas indebidamente, así como por el uso indebido de sus datos personales, antes del dos mil dieciséis.**

Lo anterior, conforme a lo que se señala a continuación:

No.	PERSONA DENUNCIANTE	FECHA DE AFILIACIÓN	MULTA IMPUESTA EN SMGVDF	VALOR SMGVDF	SANCIÓN A IMPONER
1	Axel Martínez Betanzos	23/02/2013	963	\$64.76	\$62,363.88
2	Mitzi Ortiz Rodríguez	20/04/2013	963	\$64.76	\$62,363.88
3	Israel Ávila Salgado	20/10/2014	963	\$67.29	\$64,800.27
4	Dalia Karina Hernández Higareda	08/12/2013	963	\$64.76	\$62,363.88
5	Lourdes Elizalde Juárez	03/09/2015	963	\$70.10	\$67,506.30
6	Insdy Suárez Bautista	02/01/2015	963	\$70.10	\$67,506.30
7	Blanca Esmeralda Hernández Escobar	19/08/2015	963	\$70.10	\$67,506.30

¹⁷² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

¹⁷³ En lo subsecuente **SMGVDF**.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

No.	PERSONA DENUNCIANTE	FECHA DE AFILIACIÓN	MULTA IMPUESTA EN SMGVDF	VALOR SMGVDF	SANCIÓN A IMPONER
8	Ernesto Ariza Becerra	01/03/2013	963	\$64.76	\$62,363.88
9	Lucia Viridiana Guerrero Martínez	09/04/2014	963	\$67.29	\$64,800.27

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que **el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza**, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para **fijar el monto de obligaciones o sanciones**.

En esas condiciones, para los casos las afiliaciones realizadas antes de dos mil dieciséis, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (963 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por su valor en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el **ejercicio fiscal de dos mil veintidós, a \$96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N.)**, resultando las siguientes cantidades:

NO	PERSONA DENUNCIANTE	AÑO DE AFILIACIÓN	MULTA IMPUESTA EN SMGV	VALOR SMGV	VALOR UMA VIGENTE	SANCIÓN EN UMAS (A*B)/C ¹⁷⁴	SANCIÓN A IMPONER (C*D)
			A	B	C	D	
1	Axel Martínez Betanzos	23/02/2013	963	\$64.76	\$96.22	648.13	\$62,363.06
2	Mitzi Ortiz Rodríguez	20/04/2013	963	\$64.76	\$96.22	648.13	\$62,363.06
3	Israel Ávila Salgado	20/10/2014	963	\$67.29	\$96.22	673.45	\$64,799.35
4	Dalia Karina Hernández Higareda	08/12/2013	963	\$64.76	\$96.22	648.13	\$62,363.06
5	Lourdes Elizalde Juárez	03/09/2015	963	\$70.10	\$96.22	701.58	\$67,506.02
6	Insdy Suárez Bautista	02/01/2015	963	\$70.10	\$96.22	701.58	\$67,506.02
7	Blanca Esmeralda Hernández Escobar	19/08/2015	963	\$70.10	\$96.22	701.58	\$67,506.02
8	Ernesto Ariza Becerra	01/03/2013	963	\$64.76	\$96.22	648.13	\$62,363.06
9	Lucia Viridiana Guerrero Martínez	09/04/2014	963	\$67.29	\$96.22	673.45	\$64,799.35

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA**

¹⁷⁴ Cifra al segundo decimal.

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.¹⁷⁵

Respecto a las conductas denunciadas acontecidas a partir del dos mil dieciséis, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una **multa** equivalente a **963** (novecientos sesenta y tres) **Unidades de Medida y Actualización** al momento de la comisión de la conducta, conforme a lo que se señala a continuación:

No.	PERSONA DENUNCIANTE	FECHA DE AFILIACIÓN	MULTA IMPUESTA EN UMA	VALOR UMA 2016-2017 ¹⁷⁶	MULTA
1	Diana Ángeles Lara Trujillo	15/11/2017	963	\$75.49	\$72,696.87
2	Rosa María Herrera Ledezma	15/08/2016	963	\$73.04	\$70,337.52
3	Yesica Gutiérrez Gutiérrez	27/10/2017	963	\$75.49	\$72,696.87
4	Princesa Jara Quiroz Reyes	26/05/2016	963	\$73.04	\$70,337.52
5	Yessenia Valdez Jiménez	16/01/2016	963	\$73.04	\$70,337.52

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta a **MORENA** constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por **MORENA**, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/**02997/2022**, emitido por la **DEPPP**, se advierte que a **MORENA** le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias para el mes de **octubre** de dos mil veintidós, la cantidad de **\$139,155,282.13** (ciento

¹⁷⁵ Consultable en la [liga electrónica](http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N) <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

¹⁷⁶ Consultable en la página de internet: <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

treinta y nueve millones ciento cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y dos pesos 13/100 M.N.).

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa, para cada persona denunciante, el porcentaje:

NO	PERSONA DENUNCIANTE	MONTO DE LA SANCIÓN POR PERSONA	% DE LA MINISTRACIÓN MENSUAL POR PERSONA ¹⁷⁷
1	Axel Martínez Betanzos	\$62,363.06	0.04%
2	Mitzi Ortiz Rodríguez	\$62,363.06	0.04%
3	Israel Ávila Salgado	\$64,799.35	0.04%
4	Dalia Karina Hernández Higareda	\$62,363.06	0.04%
5	Lourdes Elizalde Juárez	\$67,506.02	0.04%
6	Insdy Suárez Bautista	\$67,506.02	0.04%
7	Blanca Esmeralda Hernández Escobar	\$67,506.02	0.04%
8	Ernesto Ariza Becerra	\$62,363.06	0.04%
9	Lucia Viridiana Guerrero Martínez	\$64,799.35	0.04%
10	Diana Ángeles Lara Trujillo	\$72,696.87	0.05%
11	Rosa María Herrera Ledezma	\$70,337.52	0.05%
12	Yesica Gutiérrez Gutiérrez	\$72,696.87	0.05%
13	Princesa Jara Quiroz Reyes	\$70,337.52	0.05%
14	Yessenia Valdez Jiménez	\$70,337.52	0.05%

Por consiguiente, la sanción impuesta a **MORENA** no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes que transcurre.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por **MORENA** (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del **INE** para el presente mes, para cumplir con sus

¹⁷⁷ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el mencionado partido político —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia del SUP-RAP-114/2009—¹⁷⁸ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LGIFE*, las cantidades objeto de las multas serán deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba MORENA, una vez que esta resolución haya quedado firme.

6.2 Registro indebido como representantes de mesa directiva de casilla

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
MORENA	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , la <i>LGIFE</i> y la <i>LGPP</i> .	Transgresión al derecho de la ciudadanía a una participación política libre e individual, así como el uso indebido de los datos personales de María de Lourdes Hernández García y María Teresa Hernández Segura , derivado del indebido ejercicio del derecho constitucional y legal de nombrar representantes ante mesa directiva de casilla.	Artículos 6, 16 y 35, fracción III, de la <i>Constitución</i> ; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la <i>LGIFE</i> , 23, párrafo 1, inciso a) y 25 incisos a) e y), de la <i>LGPP</i> .

¹⁷⁸ Consultable en la liga de internet: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/executoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf.

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En los artículos 1 y 35, fracción III de la *Constitución*, se establece la titularidad de los derechos humanos en beneficio de todas las personas y la libertad de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país, lo que conlleva, de forma implícita, el derecho a no ser asociado o vinculado para representar los intereses de un partido político.

En ese sentido, en los artículos 23, párrafo 1, inciso a) y 25, párrafo 1, inciso a) de la *LGPP* se prevé el derecho de los partidos políticos de participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, así como de nombrar representantes ante los órganos del Instituto Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Locales, así como la obligación de éstos de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

Asimismo, en los artículos 6 y 16 de la referida Carta Magna, se reconoce el derecho a la protección de datos personales, mientras que el artículo 29 de la *LGPP* prevé que los partidos políticos deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de éstos.

En el particular, se acreditó que **MORENA**, transgredió el derecho de participación política libre e individual de **María de Lourdes Hernández García** y **María Teresa Hernández Segura** como representantes ante mesa directiva de casilla con el objeto de que éstas defendieran sus intereses ante un órgano electoral, con lo cual, además hizo uso indebido de sus datos personales, todo ello derivado del ejercicio indebido de su derecho constitucional y legal de nombrar representantes ante mesa directiva de casilla.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de participación política libre e individual, así como de protección de datos personales de los ciudadanos mexicanos, los cuales son derechos humanos por los que se otorga a los individuos la decisión de ser o no vinculados con un partido político, ya sea por compartir o no

su ideología o simpatizar o no con ésta, así como el poder de controlar su información personal, decidir con quién se comparte y para qué se utiliza con terceros, así como el derecho a que ésta se trate de forma adecuada, para permitir el ejercicio de otros derechos y evitar daños a su titular; lo cual implica la obligación de los partidos políticos de hacer un debido ejercicio de su derecho constitucional y legal de nombrar a representantes ante mesas directivas de casilla, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes pretenden designar, efectivamente consintieron libremente ser acreditados.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

La falta es **singular**, por lo siguiente:

Aun cuando se acreditó que **MORENA** transgredió lo establecido en diversas disposiciones constitucionales y legales y que tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de **María de Lourdes Hernández García** y **María Teresa Hernández Segura**, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, tanto la vulneración a su derecho ciudadano de participación política, así como el uso indebido de sus datos personales derivaron, en el indebido ejercicio del derecho constitucional y legal del instituto político denunciado de nombrar a quienes lo representan ante mesas directivas de casilla, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

Cabe precisar que, en apartados subsecuentes, se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse de manera conjunta con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles a **MORENA**, consistieron en el indebido ejercicio del derecho constitucional y legal de nombrar a representantes ante mesa directiva de casilla sin su consentimiento, en perjuicio de **María de Lourdes Hernández García** y **María Teresa Hernández Segura**, haciendo uso indebido de sus datos personales y vulnerando su derecho como ciudadanas a una participación política libre e individual.

- b) **Tiempo.** En el caso concreto, el registro denunciado se llevó a cabo durante el Proceso Electoral 2020-2021, particularmente en el año **dos mil veintiuno**, durante el periodo del 16 de abril al 24 de mayo, plazo en el que los partidos políticos nacionales y locales, así como de candidaturas independientes podían iniciar y concluir, respectivamente, el registro de sus representantes.
- c) **Lugar.** La acreditación indebida denunciada se realizó como representantes de partido político ante mesa directiva de casilla ubicadas en el **Estado de México**.

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte de **MORENA**, en transgresión a lo previsto en los artículos 1, 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; y 25, párrafo 1, incisos a), e y), de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- **MORENA** es un partido político nacional, y por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- **MORENA** está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

- El derecho de la ciudadanía de participación política implica el derecho a no ser vinculado o relacionado con alguna fuerza política, y en ese sentido, a no ser registrado para defender sus intereses sin que obre consentimiento pleno e informado de los alcances de dicha representación.
- La acreditación de una ciudadana o ciudadano como representante ante Mesa Directiva de Casilla o como representante general, sin que se haya manifestado su consentimiento, afecta directamente la honra, reputación e imagen de la persona, en contravención de lo establecido en los artículos 1 y 35, fracción III, constitucionales, así como 11, párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- El ejercicio del derecho humano a la protección a la información que se refiere a la vida privada y los datos personales que debe tener cualquier partido político, como lo es MORENA, conlleva un deber positivo a cargo de los institutos políticos, consistente en resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde consten datos de carácter personales, tanto de sus militantes, como de aquellas personas que no tengan relación con dicho partido político.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- El uso indebido de datos personales sin el consentimiento de los titulares de éstos, realizado por un partido político, como MORENA, es una transgresión de orden constitucional y legal.

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) **María de Lourdes Hernández García y María Teresa Hernández Segura**, aducen que en algún momento manifestaron su consentimiento o

autorización para que MORENA las acreditara como representante ante mesa directiva de casilla, e hiciera uso de sus datos personales.

- 2) Quedó acreditado que MORENA transgredió sus derechos como ciudadanas de participación política e hizo uso indebido de esos datos personales.
- 3) El partido político denunciado no demostró, ni probó que **María de Lourdes Hernández García** y **María Teresa Hernández Segura** hubieran otorgado su autorización para que se hiciera uso de sus datos personales para acreditarlas como su representante ante mesa directiva de casilla para el Proceso Electoral 2020-2021.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por **MORENA** se cometió derivado del ejercicio indebido de su derecho constitucional y legal de nombrar a quienes los representan ante mesas directivas de casilla sin su consentimiento, lo cual derivó en la transgresión al derecho a no ser vinculado con dicho partido político, en relación con el derecho a una participación política libre e individual, así como un uso indebido de datos personales en perjuicio de **María de Lourdes Hernández García** y **María Teresa Hernández Segura**.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido político, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la *LGIE*, se considerará reincidente a quien habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la mencionada ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, el *Tribunal Electoral* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

- 1) Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
- 2) Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
- 3) Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**¹⁷⁹

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace a **MORENA**, pues si bien en los archivos de este Instituto, obra la resolución **INE/CG42/2020**,¹⁸⁰ dictada por el *Consejo General* el veintiuno de octubre de dos mil veinte, al resolver el procedimiento sancionador ordinario con clave de expediente UT/SCG/Q/JHDJ/CG/166/2019, lo cierto es que, los hechos materia de pronunciamiento en la presente determinación, acontecieron con anterioridad —dos mil quince— al dictado de la resolución en comento—dos mil veintidós—, razón, por la que no se acredita uno de los elementos de la reincidencia contenido en la Jurisprudencia **41/2010**.

¹⁷⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

¹⁸⁰ Consultable en la página de internet: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113616/CGor202002-21-rp-7-12.pdf>

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

En ese sentido, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Que se tiene por acreditada la transgresión al derecho ciudadano de participación política libre e individual, al haberlas vinculado con el partido político denunciado sin que éstas hubieran otorgado su consentimiento para ello.
- Que se tiene por acreditada la utilización indebida de datos personales derivado del indebido ejercicio del derecho constitucional y legal de los partidos políticos de nombrar a quienes lo representan ante mesa directiva de casilla, sin su consentimiento.
- Se trató de una conducta dolosa, puesto que **MORENA**, en cualquier caso, tiene el deber positivo de no vincular a las y los ciudadanos que no hayan accedido explícitamente a ello, así como de resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde consten datos de carácter personales, tanto de sus militantes, como de aquellas personas que no tengan relación con dicho partido político, lo que, en el particular, constituyó una transgresión de orden constitucional y legal.

- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún proceso electoral.
- No existe reincidencia por parte de **MORENA**.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió **MORENA** como de **gravedad ordinaria**.

C. Sanción a imponer

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción, y hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.¹⁸¹

El artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por

¹⁸¹ Véase la Tesis XXVIII/2003, del Tribunal Electoral, de rubro "SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES."

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por MORENA se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE* confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que, en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE* no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida a MORENA, justifican la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II,

de la *LGIFE*, consistente en una **MULTA**, equivalente a **642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización** vigentes en **dos mil veintiuno**.

Lo anterior, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**¹⁸² emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios

¹⁸² Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”

En ese sentido, se impone a **MORENA** una **MULTA** de **642** (seiscientos cuarenta y dos) **Unidades de Medida y Actualización vigentes en dos mil veintiuno**,¹⁸³ por cada una de las personas denunciantes:

C.	PERSONA	UMA 2021	MULTA
1	María de Lourdes Hernández García	\$89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.)	\$57,536.04 (cincuenta y siete mil quinientos treinta y seis pesos 04/100 M.N.)
2	María Teresa Hernández Segura	\$89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.)	\$57,536.04 (cincuenta y siete mil quinientos treinta y seis pesos 04/100 M.N.)

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**.¹⁸⁴

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta a **MORENA** constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte de **MORENA**, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

¹⁸³ Unidad de Medida y Actualización (UMA) 2021: **\$89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.)**. Consulta en: <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

¹⁸⁴ Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

Del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/**02997/2022**, emitido por la *DEPPP*, se advierte que a **MORENA** le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias para el mes de **octubre** de dos mil veintidós, la cantidad de **\$139,155,282.13** (ciento treinta y nueve millones ciento cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y dos pesos 13/100 M.N.).

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa el porcentaje de **0.04%**.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala Superior en la sentencia del SUP-RAP-114/2009—¹⁸⁵ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LGIFE*, las cantidades objeto de las multas serán deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba **MORENA**, una vez que esta resolución haya quedado firme.

OCTAVO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,¹⁸⁶ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la *Ley de Medios*; así como del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento.

¹⁸⁵ Consultable en la liga de internet: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf.

¹⁸⁶ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL", y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL."

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se **sobresee** el procedimiento sancionador ordinario incoado en contra de **MORENA**, con motivo de la denuncia presentada por **Rudy Esequiel Gutiérrez Díaz**, en términos de lo establecido en el Considerando **TERCERO**.

SEGUNDO. Se **acredita la infracción** atribuida a **MORENA**, consistente en la afiliación indebida y uso de datos personales, para tal efecto, en perjuicio de las **catorce** personas que se indican a continuación, en términos de lo establecido en el **Apartado A** del numeral **5** del Considerando **SEXTO**.

C.	PERSONA
1	Axel Martínez Betanzos
2	Mitzi Ortiz Rodríguez
3	Israel Ávila Salgado
4	Diana Ángeles Lara Trujillo
5	Rosa María Herrera Ledezma
6	Yesica Gutiérrez Gutiérrez
7	Dalia Karina Hernández Higareda
8	Lourdes Elizalde Juárez
9	Insdý Suárez Bautista
10	Blanca Esmeralda Hernández Escobar
11	Princesa Jara Quiroz Reyes
12	Ernesto Ariza Becerra
13	Yessenia Valdez Jiménez
14	Lucia Viridiana Guerrero Martínez

TERCERO. Se **acredita la infracción** atribuida a **MORENA**, consistente en el indebido ejercicio del derecho constitucional y legal de nombrar como sus representantes ante mesa directiva de casilla a **María de Lourdes Hernández García** y **María Teresa Hernández Segura**, en términos de lo establecido en el **Apartado B** del numeral **5** del Considerando **SEXTO**.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

CUARTO. En términos del Considerando SÉPTIMO de la presente resolución, se impone a **MORENA**, las multas que se indican a continuación:

N°	Por la afiliación indebida y uso indebido de datos personales de:	Sanción a imponer en Unidad de Medida y Actualización	Sanción a imponer
1	Axel Martínez Betanzos	648.13 (seiscientos cuarenta y ocho punto trece) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadano afiliado en 2013]	\$62,363.06 (sesenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 06/100 M.N.)
2	Mitzi Ortiz Rodríguez	648.13 (seiscientos cuarenta y ocho punto trece) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadana afiliada en 2013]	\$62,363.06 (sesenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 06/100 M.N.)
3	Israel Ávila Salgado	673.45 (seiscientos setenta y tres punto cuarenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadano afiliado en 2014]	\$64,799.35 (sesenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve 35/100 M.N.)
4	Dalia Karina Hernández Higareda	648.13 (seiscientos cuarenta y ocho punto trece) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadana afiliada en 2013]	\$62,363.06 (sesenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 06/100 M.N.)
5	Lourdes Elizalde Juárez	701.58 (setecientos un punto cincuenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadana afiliada en 2015]	\$67,506.02 (sesenta y siete mil quinientos seis pesos 02/100 M.N.)
6	Insdy Suárez Bautista	701.58 (setecientos un punto cincuenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadana afiliada en 2015]	\$67,506.02 (sesenta y siete mil quinientos seis pesos 02/100 M.N.)
7	Blanca Esmeralda Hernández Escobar	701.58 (setecientos un punto cincuenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadana afiliada en 2015]	\$67,506.02 (sesenta y siete mil quinientos seis pesos 02/100 M.N.)
8	Ernesto Ariza Becerra	648.13 (seiscientos cuarenta y ocho punto trece) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadano afiliado en 2013]	\$62,363.06 (sesenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 06/100 M.N.)
9	Lucia Viridiana Guerrero Martínez	673.45 (seiscientos setenta y tres punto cuarenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadana afiliada en 2014]	\$64,799.35 (sesenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 35/100 M.N.)

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

N°	Por la afiliación indebida y uso indebido de datos personales de:	Sanción a imponer en Unidad de Medida y Actualización	Sanción a imponer
10	Diana Ángeles Lara Trujillo	963 (seiscientos sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadana afiliada en 2017]	\$72,696.87 (setenta y dos mil seiscientos noventa y seis pesos 87/100 M.N.)
11	Rosa María Herrera Ledezma	963 (seiscientos sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadana afiliada en 2016]	\$70,337.52 (setenta mil trescientos treinta y siete pesos 52/100 M.N.).
12	Yesica Gutiérrez Gutiérrez	963 (seiscientos sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadana afiliada en 2017]	\$72,696.87 (setenta y dos mil seiscientos noventa y seis pesos 87/100 M.N.)
13	Princesa Jara Quiroz Reyes	963 (seiscientos sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadana afiliada en 2016]	\$70,337.52 (setenta mil trescientos treinta y siete pesos 52/100 M.N.).
14	Yessenia Valdez Jiménez	963 (seiscientos sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadana afiliada en 2016]	\$70,337.52 (setenta mil trescientos treinta y siete pesos 52/100 M.N.).

N°	Por la indebida designación como representante ante mesa directiva de casilla y uso indebido de datos personales de:	Sanción a imponer en Unidad de Medida y Actualización	Sanción a imponer
1	María de Lourdes Hernández García	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadana registrada como representante ante mesa directiva de casilla en 2021]	\$57,536.04 (cincuenta y siete mil quinientos treinta y seis pesos 04/100 M.N.)
2	María Teresa Hernández Segura	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadana registrada como representante ante mesa directiva de casilla en 2021]	\$57,536.04 (cincuenta y siete mil quinientos treinta y seis pesos 04/100 M.N.)

QUINTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta a **MORENA** será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su considerando SÉPTIMO.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento.

NOTIFÍQUESE, personalmente a:

C.	PERSONA
1	Axel Martínez Betanzos
2	Mitzi Ortiz Rodríguez
3	Israel Ávila Salgado
4	Rudy Ezequiel Gutiérrez Díaz
5	Diana Ángeles Lara Trujillo
6	Rosa María Herrera Ledezma
7	Yesica Gutiérrez Gutiérrez
8	Dalia Karina Hernández Higareda
9	Lourdes Elizalde Juárez
10	Insdý Suárez Bautista
11	Blanca Esmeralda Hernández Escobar
12	Princesa Jara Quiroz Reyes
13	Ernesto Ariza Becerra
14	Yessenia Valdez Jiménez
15	Lucia Viridiana Guerrero Martínez
16	María de Lourdes Hernández García

Notifíquese por estrados a María Teresa Hernández Segura.

Notifíquese a MORENA, en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y por **estrados** a quienes resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMB/JD11/CDM/13/2022

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de octubre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reiteración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**